



PERIODO
PRESIDENCIAL
008385
ARCHIVO

TENSIONES CIVICO-MILITARES
RECAPITULACION DE HECHOS Y OPINIONES
28 de mayo al 3 de junio de 1993

La siguiente es una recapitulación de los hechos y opiniones en relación a las tensiones cívico militares experimentadas a partir del viernes 28 de mayo pasado.

Viernes 28 de mayo:

Los noticiarios de TV fueron los encargados de informar al país sobre los sucesos registrados el viernes en el edificio de las FF.AA. Esa mañana el diario La Nación informaba en portada sobre la denuncia del Consejo de Defensa del Estado ante la Justicia, por un presunto fraude al Fisco en el caso de los cheques pagados por el Ejército a Augusto Pinochet Hiriart, información anticipada el día anterior por El Diario.

Teletrece calificó los hechos como: "inusual y sorpresivo" reforzamiento de la guardia del edificio de las FF.AA. por comandos del Ejército fuertemente armados. Presentó imágenes exclusivas de la llegada de las tropas al edificio a las 10 (los demás canales señalan los hechos a partir de las 11 más o menos).

En tanto, Meganoticias calificó la situación como de "un inquietante e inusual movimiento militar". Agrega indica "que aunque nadie decía nada, las imágenes hablaban por sí solas" y "la desinformación ayudaba, como siempre, a que los rumores crecieran".

Por su parte, 24 Horas señaló que la presencia de boinas negras recordó los ejercicios de enlace del 19 de diciembre de 1990.

Según Teletrece la situación obedecería al malestar del Ejército por una presunta campaña de hostigamiento contra la institución. Agrega que fuentes absolutamente confiables aseguraron que el Ejército estuvo en estado de alerta con acuartelamiento grado 1, entre las 9 y las 17 horas.

Teletrece señala que entre los hechos que habrían causado más molestia en los militares figuran:

- Citaciones a declarar en procesos por violaciones a los DD.HH.
- Acusación de haber incinerado el informe de espionaje telefónico.
- La insistencia del Ejecutivo en reformar la LOC de las FFAA, para que el Presidente pueda llamar a retiro a oficiales.
- La reapertura del caso de los cheques pagados por el Ejército al hijo del general Pinochet.

Meganoticias agrega entre los motivos de inquietud del Ejército las acusaciones de Andrés Allamand sobre la intromisión de poderes fácticos -entre ellos el Ejército- en las decisiones de la derecha.

Según Teletrece el término del movimiento obedecería a las negociaciones con el Gobierno, las que habrían significado el compromiso oficial de moderar lo que el Ejército ha llamado hostigamiento.

El Subsecretario General de Gobierno, Edgardo Riveros, dijo que la situación era "absolutamente normal en todo el país". En tanto, el Subsecretario de Guerra, Marcos Sánchez, señaló que había estado en contacto con la Comandancia en Jefe del Ejército y había absoluta normalidad en esa institución

El Departamento Comunicacional del Ejército dijo que se trataba de una reunión del cuerpo de generales que se realizó de acuerdo al período de planificación militar.

En tanto, el Presidente de la República, Patricio Aylwin, aseguró en Dinamarca que "la democracia no corre peligro". Dijo que la reunión de generales fue convocada para referirse a un asunto que está en manos de un Poder independiente del Estado: los Tribunales de Justicia. Sin referirse específicamente al caso, señaló que éste ha sido llevado a los tribunales por decisión del Consejo de Defensa del Estado, un organismo estatal dotado de autonomía. Aclaró que el Ejecutivo no ha intervenido de modo alguno en la materia: "Yo no veo por qué el ejercicio de las atribuciones propias de los tribunales de justicia pueda crear inquietud y motivar deliberaciones en ninguna institución.

Sábado 29 de mayo:

Una crónica de portada en La Epoca dice que mientras el Gobierno afirmó que se trataba sólo de un reforzamiento de la guardia en torno al edificio de las FF.AA., debido a una reunión de generales programada con anterioridad; desde "fuentes ligadas al Ejército" se "filtró" que se trataba de una "Alerta en grado 1" motivada por la percepción castrense de que en el país se vive un "clima de amenazas" contra la institución, que habría sido detonado por recientes declaraciones de políticos de Gobierno y oposición.

La misma crónica de La Epoca agrega que trascendidos señalan que como desencadenante de la situación habrían operado declaraciones de Genaro Arriagada sobre las últimas denuncias en torno a casos de espionaje, en las que se habría sugerido responsabilidades del Ejército.

Para las fuentes de La Epoca la concatenación de hechos no es una casualidad. Opinan que se da en el marco del clima electoral, donde una materia reflatada con particular fuerza la sido la modificación a la LOC de las FF.AA.

Una crónica de El Mercurio dice que el Gobierno conocía desde hace dos semanas el malestar existente en el Ejército por la posible reapertura del caso de los cheques, que implica que cinco generales

concurran a declarar.

El senador del PS, Ricardo Núñez, dijo que la mayoría del país quiere tranquilidad y que las instituciones armadas deben entender que las demostraciones de fuerza "forman parte del pasado".

El diputado de RN, Raúl Urrutia, descartó una relación entre la reapertura del caso de los cheques pagados por el Ejército a Augusto Pinochet Hiriart y el acuartelamiento del viernes. Desestimó que se trate de una presión para que no se investigue el caso. Consideró necesario esperar el resultado de la investigación y "si se detectan irregularidades punibles", sancionarlas: "En Chile no hay excepciones". A pesar de lo anterior, estimó extemporánea la denuncia por fraude al Fisco del Consejo de Defensa del Estado, debido al período preelectoral que vive el país. A juicio del diputado Urrutia "se ha tratado de tapar el escándalo surgido como consecuencia de las denuncias en la RPC, y hacer una especie de compensación con un hecho que la opinión pública conoció hace dos años".

El "análisis" del periodista de La Epoca, Marcos Robledo, dice que la reunión entre el Ministro Secretario General de Gobierno, y el Comandante en Jefe del Ejército, un día antes que se conociera la decisión del Consejo de Defensa del Estado, sin proponérselo, marcó el fin de la mejor etapa de las relaciones entre el Gobierno y el Ejército, iniciada tras el anuncio del general Pinochet del plan de modernización de la institución, el 23 de agosto de 1992. El analista de La Epoca señala que voceros militares estiman que desde hace unos meses se vive un creciente descontento en la institución por una serie de problemas importantes que, sin embargo, no habían trascendido a la esfera pública. Tales problemas habrían llevado a "algún oficial" a comentar hace algunas semanas que en el futuro podría haber otro "corcoveo".

Estima que para el Gobierno el Plan de Modernización marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la transición, entendiéndolo como un proceso de reprofesionalización del Ejército.

A partir de ello en el Gobierno se reafirmaría una política 'comprensiva' hacia el Ejército, entendiéndose que durante un tiempo largo coexistirán dos líneas de desarrollo, dos lógicas (probablemente en un ritmo inversamente proporcional) de conducta en el ámbito militar: la del rol tutelar y la que comprende la necesidad de modernizar y reprofesionalizar a la institución. Esto según Marcos Robledo, no significa un juego de tendencias o fracciones internas en torno a ambas ideas, sino de una evolución en el pensamiento institucional que debiera tender a superar la primera e incorporar crecientemente la segunda.

Sostiene que en la práctica, desde una perspectiva poco socializada, pero ampliamente compartida en círculos de Gobierno, el balance reconoce al Ejército un esfuerzo considerable por

insertarse en el nuevo contexto nacional e internacional. No sólo no ha interrumpido el proceso político, sino que ha realizado lo denomina una 'triple transición': en su propia estructura interna; en su apreciación interna; y en la internacional.

El análisis de La Epoca, dice que en ese escenario, la reunión del Ministro Correa con el general Pinochet, a pesar de existir algunos problemas, "miraba hacia adelante". Sin embargo, a la petición del Consejo de Defensa del Estado -que el Ejército nunca ha considerado como autónomo del Gobierno- se sumaron dos hechos que al parecer el Ejército no preveía y que parecen haber aumentado su nerviosismo: las declaraciones de Andrés Allamand y de Sebastián Piñera. Ambos hechos coincidieron con el inicio de la etapa en que el proyecto de reformas constitucionales se somete a discusión para su aprobación o rechazo. El Ejército teme que en el Senado pueda repetirse la situación de la acusación constitucional contra el destituido juez Hernán Cereceda.

En el Gobierno entonces, señala Robledo, el escenario de un nuevo período de confrontación parece haber sido estudiado y, aunque lo parezca, no ha sido tomado por sorpresa como ocurrió en el caso del denominado "ejercicio de enlace" de diciembre del '90.

El análisis de La Epoca concluye diciendo que no se esperan "combates decisivos ni golpes de Estado", sino más bien una pequeña crisis "con un techo muy bajo"; más aún, una nueva señal de que, junto a la voluntad de modernización institucional, la idea del Ejército autoconcebido como el poder fáctico que denunciaba Allamand, pero también autónomo y tutelar, todavía debe ser tolerada para dejar que el tiempo haga su trabajo.

La periodista de La Tercera, María Eugenia Oyarzún, habla de un evidente malestar en las filas del Ejército por lo que estiman una "campana" montada por políticos para desprestigiar y "acorrallar" a la institución. Atribuye el carácter de "detonante" de la situación al titular de "La Nación" que informó de la reapertura del caso de los cheques. La periodista de La Tercera, cita opiniones de "esferas castrenses" que estiman al comenzar este Gobierno, las FF.AA. dieron por terminada una etapa para retornar a sus actividades profesionales. Sin embargo, a pesar de que han tratado de cooperar en la transición, sienten no contar con la defensa del Ministro Patricio Rojas, quien por el contrario, la mayoría de las veces se ha sumado a las críticas de los políticos. Los militares hablan de una "campana político-jurídica" contra el Ejército, a pesar de sus leales esfuerzos de volver a sus tareas profesionales. Estiman que han sido los únicos que han dado pruebas concretas en dirección a una reconciliación, sin embargo, han debido soportar durante tres años un "bombardeo comunicacional, político jurídico sostenido" y que, ante cualquier declaración, se les acusa de deliberación, por lo que no pueden defenderse.

Una crónica de La Tercera agrega como causas de la molestia del

Ejército, la "iniciativa constante" de disminuir los presupuestos; de eliminar el servicio militar obligatorio; citación masiva de uniformados ante tribunales, en los últimos tres años.

El senador DC, Ricardo Hormazábal, dijo que los periódicos movimientos o situaciones anómalas que se producen obedecen al proceso de acostumbramiento de las FF.AA. al hecho de que el ejercicio del poder político lo hace la civilidad, a través de los procedimientos democráticos.

El presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo, dijo que existe un conjunto de situaciones que preocupan al cuerpo de generales del Ejército, pero ello debe ser "procesado por los canales respectivos, descartando alguna acción de otro tipo que motive rumores en el país".

El senador de RN, Sergio Diez, manifestó que no existe ningún hecho que perturbe la normal relación entre el Gobierno y las FF.AA. Dijo ser partidario del análisis sereno de asuntos de la importancia de las relaciones del Gobierno con las FF.AA. Opinó que no existen elementos que justifiquen un eventual movimiento de tropas. Agregó que el Ejecutivo ha enviado al Parlamento un proyecto de modificación de la LOC de las FF.AA. "que creo injustificado y que va a ser rechazado en el Senado, pero no creo que ésta sea una acción de propaganda en contra de éstas".

El senador de RN, Julio Lagos, dijo que para nadie es desconocida la campaña existente contra las FF.AA. y en particular contra el Ejército. Estimó que no se ha valorado realmente el aporte de las FF.AA. a la transición, la cual no ha terminado, por el contrario sectores políticos de vocación antimilitarista no han trepidado en ningún momento en buscar excusas para, de una u otra manera, llegar a afectar directamente al Ejército o a su Comandante en Jefe.

La presidenta del PDI, Fanny Pollarolo, consideró grave la "demostración de fuerza" de los militares. Estimó que el hecho muestra que en esta transición, "tan exitosa en tantos aspectos" aún no se logra la democracia plena". Opinó que los hechos muestran la manifiesta intención de seguir apareciendo "con un grado de autonomía y no subordinación a la esfera democrática". Agregó que el PDI espera una "actitud muy firme de parte del Gobierno".

El presidente del PR, senador Carlos González Márquez, dijo que el Gobierno busca tener un grado de acercamiento y entendimiento con las FF.AA., en el marco de las normas constitucionales. Si las relaciones se llevan de acuerdo a las facultades que cada uno de los poderes tiene de acuerdo al ordenamiento constitucional, ello no puede dar origen a situaciones excepcionales.

La CUT calificó la acción del Ejército como una "manifestación de indebidas presiones que no se compadecen en absoluto con el sistema democrático". Agregó que la "permanencia del general Pinochet como

Comandante en Jefe del Ejército constituyè un obstáculo permanente para el efectivo perfeccionamiento de la institucionalidad democrática".

El diputado DC, Andrés Palma, señaló que cuando un hecho de este tipo genera la alarma que causó, es que la transición no ha terminado y el país todavía tiene alguna desconfianza en las FF.AA. y que es necesario continuar el mejoramiento de relaciones con ellas y la modificación de la institucionalidad para que el país sea plenamente democrático.

El diputado de la UDI, Pablo Longueira, planteó que hay que atenerse as la información oficial. Desestimó así que exista alguna relación entre la acción del Ejército y el proceso iniciado por el Consejo de defensa del Estado. Desafió a quienes sí lo creen a dar la cara y decirlo públicamente.

El abogado Fernando Uribe-Etxeverría, asesor jurídico, de los generales llamados a declarar en el proceso, consideró "sorpresiva y curiosa", la acción legal presentada por el Consejo de Defensa del Estado, pues se trata de hechos ya investigados por la Cámara de Diputados y la Contraloría, que no estimaron pertinente poner los antecedentes en conocimiento de la justicia del crimen.

El diputado del PPD, Jorge Schaulsohn, anticipó que entregará al Consejo de Defensa del Estado, antecedentes en los cuales se establecería que el general Pinochet estuvo en conocimiento de la operación de venta de la empresa Valmoval al Ejército. Aseguró que el informe de la comisión parlamentaria que investigó el caso fue categórico en establecer hechos constitutivos de delito, los cuales habían quedado sin que se ejerciera una acción judicial. Agregó que "podría configurarse el delito contemplado en el artículo 240 del Código Penal que sostiene que las mismas penas, es decir las que se aplican al empleado público en las operaciones en que intervinieren en razón de su cargo defraudando al Fisco se impondrán a las personas relacionadas en este artículo, si en el negocio u operación confiada a su cargo dieran interés a su cónyuge o a alguno de sus ascendientes o descendientes legítimos por consanguinidad o afinidad a sus colaboradores legítimos, vale decir a los parientes más cercanos". Sostuvo que si se establece que el general Pinochet tenía conocimiento de estas transacciones "perfectamente podría ser aplicable esta norma del Código Penal".

Una crónica de La Nación dice que un tema que a las FF.AA. les cuesta comprender es el de la autonomía. Así, para ellos, la decisión del Consejo de Defensa del Estado sólo pudo provenir de los más altos niveles de Gobierno. A esa razón se suman las denuncias del senador Sebastián Piñera y la propuesta de reforma a la LOC de las FF.AA. La Nación agrega que la frontera entre una reunión "normal" y un encuentro de "deliberación" es muy tenue. Considera que sigue abierto el desafío de mejorar las relaciones y la confianza mutua.

domingo 30, de mayo:

Un reportaje de la edición dominical de El Mercurio analiza la estrategia comunicacional del Ejército: no confirmar ni desmentir nada; dejar que los rumores se encargaran de crear un estado de alerta general y, por último, limitarse a decir "aquí no ha pasado nada". A su juicio, el Ejército parecía no tener interés en disipar dudas, dejando que el tiempo y la tensión se encargaran, por medio del rumor, de darle más fuerza a una acción "lo suficientemente vaga como para ser interpretada libremente".

El Mercurio dice que a diferencia de las autoridades de Gobierno en Santiago, el Presidente desde Dinamarca "se atrevió a reconocer" de dónde provenía el asunto. Empero, no pudo modificar lo que había dicho el día anterior en Helsinki respecto a la subordinación mostrada por el Ejército y su Comandante en Jefe, limitándose a delimitar los campos que corresponde a cada poder del Estado.

El Mercurio sostiene que el Gobierno, al igual que en el Ejercicio de Enlace, repitió una interpretación benigna de hechos al menos difusos y anormales. Agrega que así como el acuartelamiento de diciembre del '90 nada tuvo de ejercicio de enlace, el estado de alerta del viernes tampoco correspondió a "planificación militar". Los rumores, como la vez anterior, terminaron siendo la verdad.

Según El Mercurio, respecto del "caso cheques" la molestia del Ejército apunta a que no se estaría cumpliendo un compromiso adquirido que pretendía dar por cerrada la historia. A pesar de que entienden que el Consejo de Defensa del Estado es un organismo autónomo, reparan en que el Gobierno no haya podido hacer nada para impedir que la situación llegara a los Tribunales. Llegan a presumir que incluso ese organismo haya sido presionado para que el caso tomara ese rumbo.

El Mercurio concluye que bastaron 40 boinas negras bien armados y cien periodistas cubriendo los hechos, para crear una sensación de temor e incertidumbre. Al Gobierno no le quedó más que bajarle el tono al asunto buscando darle tranquilidad al país. Pero tras la señal de fuerza del Ejército -dice El Mercurio- cundió la certeza de que cada vez que lo crean necesario, los militares pueden repetir su misma amenaza.

El candidato presidencial de la UDI, Jovino Novoa restó importancia a la situación y responsabilizó al Gobierno de no dar oportunamente una explicación para evitar trastornos en la opinión pública. El dirigente Julio Dittborn concordó en que se dio al asunto una trascendencia mayor que la que realmente tenía. A su juicio, hubo cierta responsabilidad de la prensa, la que debiera cuidar de "no exagerar los eventos, porque eso genera una sensación de inseguridad que a lo mejor va más allá de la realidad". "Creo -dijo Dittborn- que si el Ejército tuviera molestia respecto de ciertos hechos, los daría a conocer por los canales correspondientes".

El periodista Jorge Andrés Richards estimó que los hechos demuestran que al interior del Ejército existen dos tendencias, una que denomina militares "tutelares", apegados a prácticas del pasado, y otros que llama "emergentes" que buscan ser profesionales y no actuar en materias que no les corresponden. Consideró muy peligroso que los militares estén presionando al Gobierno para que intervenga en un organismo autónomo. Richards opinó el Gobierno no tuvo una reacción inmediata y tuvo que ser el Presidente de la República quien en el exterior, señalara lo que estaba ocurriendo.

El diputado del PPD, Víctor Manuel Rebolledo, señaló que si una rama de las FF.AA. tiene algo que señalar debehacerlo ante las autoridades que corresponda, a sus superiores jerárquicos, al Ministerio de Defensa o, eventualmente, ante el Presidente de la República por los mecanismos pertinentes.

El ex ministro Secretario General de Gobierno Cristián Labbé, indicó que es necesario "entender por qué se producen estos movimientos". A su juicio, es sabido que en el último tiempo el acoso a las FF.AA. ha sido persistente por parte de las fuerzas políticas, que han perseverado en introducir elementos perturbadores, no solamente en la relación cívico-militar, sino en la vida institucional de las FF.AA. Indica que la opinión pública debe estar suficientemente clara de que nuestra democracia no está en riesgo, pero esta movilización podría ser considerada como un "téngase presente" para quienes pretenden mantener una actitud permanente de acoso hacia las Fuerzas Armadas.

El editorial de La Epoca señala que nada es más inútil que pretender que el viernes no se produjo ninguna situación anormal con el Ejército. La crisis ha sido real, y no se favorece su solución con desinformación. La institución quiso dar una señal pública sobre un conjunto de hechos que considera "amenazantes". Lo primero es admitir que se ha entrado a una fase de tensión entre el Ejército y otros poderes del Estado -en forma principalísima el Ejecutivo-, y que dicho ambiente está circunscrito a una sola de las instituciones de la Defensa. Los motivos no son nada misteriosos, pero su solución es de alta complejidad. La Epoca concluye que aquí no está fallando solamente una concepción de la vida republicana, sino también el mecanismo apropiado para que los conflictos se planteen y se resuelvan dentro de cauces normales.

Ascanio Cavallo, en La Epoca, considera que la tensión se venía arrastrando por meses, con una diversidad de fuentes y argumentos. Lo que se produjo el viernes fue una cristalización, una conjunción de factores, previsibles y azarosos, ante los cuales el mando militar se sintió hostigado y provocado. El caso de los cheques es particularmente incómodo porque afecta en forma directa al Comandante en Jefe; pero también lo es a la inversa, porque personaliza la zona conflictiva de las relaciones con el Ejecutivo. Al cuadro de amenazas objetivas y subjetivas que percibe el Ejército se añaden las sombrías perspectivas electorales que la

derecha ha venido mostrando, y que podrían permitir a un futuro gobierno de la Concertación, desarmar el tejido institucional proyectado por el régimen militar. Esta perspectiva representa el peor de los mundos para los militares. Pero la razón es ahora mucho menos ideológica que cultural. Es un hecho que el proceso de adaptación a las condiciones democráticas ha sido menos rápido que otros cambios internos en el Ejército. Ha sido, también, mucho más áspero y traumático que en cualquier otra institución.

El senador Julio Lagos, en La Tercera, señala que como la fecha de la reunión coincidió con una escalada de atentados explosivos, que afectaron diversos puntos de la capital, era natural que los altos oficiales del Ejército, en una medida de elemental prudencia, acentuaran los dispositivos de seguridad, lo que dio motivo a algunos "afiebrados" para suponer que, esta vez, sí venía el golpe militar o, por lo menos, un aterrador "ejercicio de enlace". Sin embargo, estos sustos injustificados no son buenos para el país, porque están demostrando que ciertos sectores de izquierda, dentro y fuera de la Concertación, convencidos de que la democracia chilena subsiste sólo porque el Ejército lo permite, no tienen convicción alguna sobre la solidez de nuestra institucionalidad, siguen manteniendo una irracional desconfianza frente a nuestras Fuerzas Armadas y persisten en mirarlas como enemigo del que hay que vengarse y al que hay que destruir, so pretexto de consolidar la democracia. Es obvio que, mientras los enemigos de nuestras Fuerzas Armadas mantengan este clima de artificiales recelos y de ridículos temores, la ley orgánica constitucional relativa a estas instituciones no debe ser tocada.

María Eugenia Oyarzún dice en La Tercera que tras los breves y tranquilizadores comunicados oficiales e institucionales, hubo algo más en la jornada del viernes último, donde el único ausente comunicacionalmente fue el Ministro de Defensa, Patricio Rojas. Dice que los militares señalan que desde que aquél fuera nombrado en el cargo, quedaron en la indefensión, porque el Ministro no sólo no los ha defendido de los ataques políticos, sino que, por el contrario, "se ha sumado hasta con agrado a las campañas políticas en su contra". Para los militares esta soledad no aparece cómoda, especialmente cuando al hacer presente su malestar, son inmediatamente acusados de deliberar.

Las Fuerzas Armadas - dice María Eugenia Oyarzún- estiman que si se otorgan facultades al Presidente para llamar a retiro a los funcionarios de la Defensa, habrá una peligrosa politización al interior de las FFAA. Hay quienes, incluso, creen que la porfía en sacar la ley podría obedecer a una táctica política destinada a dejar fuera de las instituciones armadas a todo oficial que tuvo alguna función durante el gobierno pasado. También se piensa que hay una "campaña jurídico-política" en contra del Ejército. Hay quienes ven incluso la mano de los Estados Unidos en algunas medidas adoptadas, como la permanente negativa a que las FFAA chilenas puedan vender armamento y material. Se afirma que el

Ministro de Defensa no debió hacerse parte de la denuncia política de un senador de oposición, en circunstancias que hace seis meses le fue entregada al Gobierno toda la documentación que afecta al capitán Fernando Diez, cuyo delito de "abandono de deberes militares", continúa en estudio en la justicia militar. Se piensa que hay toda una campaña muy inteligentemente montada, y destinada en lo que dice relación con los medios de comunicación, a dar la imagen de que todo el bienestar existente en el país es mérito del actual gobierno, y no la consecuencia de la acertada dirección del país por parte del gobierno anterior.

La Nación en su editorial señala que, tal vez, hubo un exceso de confianza en la apreciación del escenario, debido a la falta de entusiasmo que provocó -la noche del jueves- la protesta convocada por el PC. Es cierto que hoy una manifestación contra el gobierno no logra demasiadas adhesiones. Tampoco, posiblemente, una convocada simplemente para apoyarlo porque sí. Pero, ante un desafío que implique un peligro para la continuidad democrática, es muy probable que la reacción sea distinta. No hay que equivocarse. La gran mayoría no está dispuesta a retroceder 20 años en nuestra vida cívica política.

Alberto Luengo estima en La Nación que la teoría del "aquí no ha pasado nada" en lugar de fortalecer la democracia, la debilita porque induce al rumor, aumenta la alarma y alienta la desconfianza en las autoridades. La tarea que ahora tienen por delante los negociadores de ambos lados es realizar gestos de buena voluntad, para suavizar las epidermis heridas. Quizás ese sea el único camino para restablecer también la fortaleza de la democracia.

El Ministro Secretario General de Gobierno, Enrique Correa, entrevistado en La Nación, señaló que la libertad de expresión no debiera generar conflictos graves. Los conflictos no son creados por la prensa, existen en la vida real. Se puede afirmar que hay inquietud de los militares respecto a algunos asuntos. El asunto está en manos de los tribunales y todos debemos tener confianza en que ellos se comportarán con arreglo a derecho. Ni la libertad de expresión ni la autonomía de los organismos del Estado debiera vulnerar el respeto y el resguardo debido a las instituciones militares, pero tampoco debe ser comprendida por nadie como una amenaza sino como una garantía del respeto de la ciudadanía.

Opinó el Ministro Correa que en un país fuertemente institucionalizado como el nuestro, todos los asuntos propositivos tienen un cauce normal de tratamiento. No existen en el país condiciones de ningún tipo para que estos asuntos sean resueltos por la vía extra institucional. De este modo nos vamos acostumbrando todos, civiles y militares, a un estado de derecho que funcione de modo imperturbable y es capaz de absorber y resolver civilizada e institucionalmente cualquier inquietud militar.

El Ministro Secretario Ggeneral de Gobierno realiza un balance de normalidad. La tranquilidad de los chilenos esa noche "se debe en primer lugar al gobierno, que les da seguridad de que nada puede ocurrir". El país no está ante un dilema dramático que pudiera justificar siquiera que alguien pensara en salidas extrainstitucionales. Quien así quisiera hacerlo correría una aventura. La paz que los chilenos tienen no es independiente del modo como este Gobierno actúa. Puede ser que en los momentos que había inquietud, una que otra afirmación de que las cosas eran normales pudieran parecer extemporáneas, pero hecho el balance global de las cosas, la situación terminó siendo plenamente normal.

Lunes 31 de mayo:

Apsi estima que los "movimientos militares" del viernes, se vuelven contra el propio Ejército y sus intereses más permanentes. De un sólo "boinazo" reaviva la polémica pública por el caso de los "pinocheques"; debilita la posición del Ejército ante la opinión pública nacional -y sobre todo internacional-, destruyendo la imagen que el Presidente Aylwin ha tratado de construir en sus giras al exterior. Nadie quiere afectar o menoscabar las FFAA, pero tampoco nadie quiere en Chile una democracia restringida o vigilada. Cuanto más rápido las fuerzas armadas entiendan la inutilidad de estos gestos de fuerza, y acepten plenamente los fundamentos esenciales de una democracia plena, tanto más rápido se superarán los conflictos entre la civilidad y los uniformados.

Apsi destaca que el Presidente Aylwin fue el único personero de Gobierno que, desde Europa, se hizo cargo del motivo real del "gesto" del Comandante en Jefe. Explícitamente cuestionó la legitimidad de deliberaciones provocadas por un proceso que sustancian los Tribunales de Justicia.

Según Hoy, la percepción del Gobierno era, aparentemente, que el conflicto no pasaba de eso y que existían canales y tiempos para que fuera resuelto. Hasta tal punto fue considerado como un asunto normal, que el ministro Correa se embarcó el mismo viernes hasta Antofagasta.

Hoy dice que el encuentro de los generales, que estaba en conocimiento del Gobierno, no fue sencillo. Incluso se habló de algunos focos más duros del Ejército respecto de las resoluciones a tomar. Un punto muy crítico para los militares era el que tenía relación con el informe Garín, ya que los militares sospechaban que había sido el propio Ministro Rojas el que había entregado la versión a Piñera. Las reuniones de Krauss con Ballerino, en todo caso, no parecían ir encaminadas por el lado de las negociaciones. Más bien, los militares estaban exigiendo algunas resoluciones. Se comentaba -dice Hoy- que no había exactamente una solución al problema, sino que el Gobierno se comprometía a ir resolviendo los puntos en el mediano plazo. Ello, aunque la respuesta para el tema de los cheques, al menos la que Aylwin dio desde Copenhague, era

que el asunto estaba en manos del Poder Judicial, autónomo y donde el gobierno no podía ni quería intervenir.

Revista Qué Pasa señala, en un artículo llamado "En qué está Pinochet", con respecto de la presencia del general en el Congreso el día 21 de mayo que teniendo en cuenta que se trataba del último discurso del Presidente Aylwin en el Congreso, su asistencia cobraba- en términos de imagen- una fuerza importante. "El general había estado presente en marzo de 1990 cuando Aylwin se cruzaba la banda presidencial, y el general lo despedía ahora, en su último discurso importante al país".

Qué Pasa indica que el general habría quedado preocupado- y desilusionado -con el discurso del Presidente, sobre todo con sus referencias a las modificaciones a la LOC de las FFAA.

Qué Pasa comenta que las aprensiones de Pinochet cobran mayor preocupación a medida que avanza su edad. "El general es un convencido de que no se puede ir mientras no queden solucionados todos los problemas entre Gobierno y Ejército, y eso pasa, según él, por tener la confianza absoluta de que no intentarán cambiar la LOC de las FFAA, en sus considerandos más fundamentales. Pero con 77 años está consciente de que le será difícil mantenerse en la Comandancia en Jefe hasta 1997. Por eso, según Qué Pasa la imagen que quiso proyectar con su asistencia al Congreso, no fue únicamente la de despedir simbólicamente al Presidente. "También habría buscado dar una señal efectiva de cómo el Ejército se insertaba en la institucionalidad". Además, agrega Qué Pasa, la asistencia de Pinochet al Congreso estaría reflejando también una búsqueda de reconocimiento. "Que no se le siga viendo como el ex dictador que sólo quiere acarrearle problemas al gobierno democrático, sino como un comandante en Jefe- y ex presidente de la República- que ha dado muestras de querer solucionar problemas con el gobierno y de insertarse en una institucionalidad que él mismo creó".

Qué Pasa dice que sin embargo, lejos de tranquilizarlo, el discurso del Presidente Aylwin terminó por molestarlo. Qué Pasa señala que la insistencia de Aylwin en la modificación de la LOC le molesta a Pinochet casi tanto como le enfadaron las declaraciones del presidente de RN, Andrés Allamand.

Qué Pasa indica que la rabia que sintió con Allamand no fue comparable con la molestia que le rondaba por el discurso de Aylwin. Según las palabras de un cercano asesor de Pinochet, dice Qué Pasa, "Allamand no fue más que un mosquito molesto para el general"

Sin embargo, Qué Pasa dice que la máxima preocupación actual de Pinochet no es Allamand ni Piñera. Con respecto a este último, "el Ejército no pretende abrir un flanco que ya fue cerrado, tras la investigación que el general Guillermo Garín finalizó el 15/12/92.

Hasta donde se sabe, efectivamente el general Garín proponía en su investigación amonestaciones en la hoja de vida de varios funcionarios subalternos del Comando de Telecomunicaciones, lo que respaldaría la teoría de Piñera de que Diez no actuó solo".

Qué Pasa manifiesta que "más allá de eso, todo indica que el único interesado en proseguir con esa investigación es el propio Piñera y que en sus declaraciones ni siquiera encuentra a un gran aliado en el Ministro de Defensa, Patricio Rojas". Y agrega "... es probable que nadie desmienta a Piñera respecto de que el documento fue incinerado, ni el Ejército ni el Ministerio pretenden seguir con el tema, a no ser de que una revelación de proporciones lo levante".

El Mercurio informadica de una serie de reuniones de carácter privado entre ministros de Estado y parlamentarios de las área política y defensa. Según informa El Mercurio en algunas de ellas participó el Inspector General del Ejército, general Jorge Ballerino.

El Mercurio dice que el Vicepresidente de la República, Enrique Krauss, admitió que las movilizaciones de tropas y reforzamientos militares hicieron objetivamente "tensas" las relaciones del Gobierno con el Ejército. Indicó que, sin embargo, que no se trata de "una situación perturbadora". En La Tercera agrega que "espera que no se llegue a extremos que, sin duda, perjudicarían no sólo al país como país, a nuestra experiencia como esfuerzo democrático, sino también a las instituciones que adoptaron algunas medidas de tensión".

En torno al caso del hijo del general Pinochet, el Vicepresidente de la República, Enrique Krauss manifestó que " es una materia que le corresponde arbitrar a los abogados del fisco que han tomado la determinación de intervenir y al Poder Judicial en cuanto tenga que adoptar las medidas de investigación correspondientes".

En tanto, el Ministro del Interior subrogante, Belisario Velasco, aseguró que las relaciones con el Ejército "son absolutamente normales, así como entre los demás poderes del Estado".

El Mercurio señala que en la reunión del Consejo de Generales del viernes último, los uniformados analizaron hechos políticos que los afectan y transmitieron sus inquietudes al respecto al Vicepresidente de la República, Enrique Krauss, en dos reuniones que sostuvo con oficiales de esa institución.

El diario La Tercera señala que "a pesar de que en el Gobierno se insiste en la absoluta normalidad que impera en el país, después de la inquietud que provocaron los desplazamientos militares el viernes pasado, ayer se realizaron varias reuniones interministeriales fuera del Palacio de La Moneda". Agrega que en la residencia del Vice-presidente de la República, Enrique Krauss,

se desarrollaron dos importantes encuentros en torno a los cuales hubo absoluto hermetismo.

Según La Tercera la última reunión habría sido convocada después de un contacto telefónico entre Krauss y el Presidente Patricio Aylwin. A ella asistieron los ministros de Defensa, Patricio Rojas y Secretario General de Gobierno, Enrique Correa quienes también habrían participado en un encuentro realizado en la mañana en el mismo lugar.

Al encuentro de la mañana asistieron el Ministro de Interior subrogante, Belisario Velasco; el Secretario General de Gobierno, Enrique Correa; el titular de Defensa, Patricio rojas; de Planificación y Cooperación, Sergio Molina; el integrante de la Comisión de Defensa del Senado, Arturo Frei y el Subsecretario de Guerra, Marcos Sánchez. El diario La Nación dice que sorprendió la presencia del Ministro Molina, el único de los presentes cuya cartera no está vinculada directamente con el tema de defensa. Según La Nación versiones no oficiales indicaron que aportó antecedentes especiales que estaban en su poder.

La Nación indica que el senador Arturo Frei fue llamado para buscar algunas alternativas de diálogo con el Ejército y con el senador de Renovación Nacional Sergio Onofre Jarpa (pdte. de la Comisión de Defensa). Al respecto el senador Arturo Frei precisó " todo el mundo sabe que hubo una situación de crisis que no se puede negar y yo estoy trabajando para que se supere"

La Nación señala que hasta el día domingo, el Ejército mantenía un acuartelamiento en grado 2 (lo que significa que sólo los efectivos casados pueden regresar a sus hogares) en todas las unidades que Pinochet recorrió el sábado (la Escuela Militar, y los regimientos Buin, Tacna y los Libertadores). Hasta el mediodía de sábado, esas unidades se encontraban en acuartelamiento grado uno.

La Tercera comenta que algunos trascendidos indican que aún no han concluido las conversaciones entre el Ejército y el Ejecutivo sobre la molestia que subsiste en las filas de esa rama castrense por la modificación de la LOC, la reapertura del caso de los cheques y una serie de hechos que son considerados como parte de una campaña de hostigamiento hacia el Ejército.

La Tercera dice que se ha dicho que "hay malestar en sectores militares por la forma como el titular de Defensa, Patricio Rojas, ha actuado, en especial cuando señaló que era muy probable que el informe sobre espionaje político hubiese sido incinerado". Agrega que "el Ministro Enrique Correa se ha apresurado a advertir que nadie ha pedido la renuncia de Rojas y que este es un tema sobre el que sólo tiene atribuciones el Presidente Patricio Aylwin".

La Tercera indica que "por su parte, Krauss niega enfáticamente que Rojas sea la piedra de tope de las relaciones entre el Ejecutivo y

el Ejército, pero ciertas fuentes indican que éste sigue siendo uno de los puntos pendientes en las conversaciones entre ambos estamentos".

Para La Tercera, si bien la situación parece controlada, el regreso del Presidente Aylwin es clave para la superación absoluta del impasse. Según trascendidos, dice La Tercera, lo espera una reunión con representantes del alto mando castrense, seguramente con el Comandante en Jefe de la institución.

Por otra parte, La Tercera señala que se observó durante el fin de semana bastante movimiento de helicópteros "Puma" del comando de Aviación del Ejército, basados en el aeródromo Tobalaba. Según La Tercera el vuelo de los aparatos también fue calificado de "inusual" por parte de los vecinos del recinto aéreo. Agrega La Tercera, que igualmente, se supo de reuniones de algunos miembros del alto mando institucional en la residencia de uno de ellos y que el sábado habría ocurrido algo similar en la casa del comandante en jefe, general Augusto Pinochet.

Según La Tercera, no se descarta que proseguirán las conversaciones, iniciadas el viernes, entre el Vicepresidente de la República, Enrique Krauss, junto a sus asesores más inmediatos, y una comisión de generales. Agrega que "analistas dijeron a La Tercera que existía la voluntad de ambas partes de poner fin a estas nuevas "diferencias de opiniones" surgidas de múltiples hechos públicos".

Por su parte el diario El Siglo destaca que "ni la inteligencia de Investigaciones (cercana a la Moneda) ni la tan "eficiente" Oficina de Seguridad tenían antecedente alguno del movimiento de tropas que había comenzado ese día (viernes) a las dos de la madrugada". y, agrega "la sorpresa fue casi completa".

Según El Siglo las unidades que se pusieron en movimiento estaban formadas, especialmente, por clases, suboficiales y oficiales. No, conscriptos.

El Siglo indica que "se presume que, como el cuartelazo anterior, la cúpula del Ejército buscó hacer contacto con el Gobierno a través del Presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo. El Ministro de Defensa, Patricio Rojas, nuevamente fue puesto en segundo orden por los militares".

El Siglo dice que fue el propio generalato el que informó a Krauss, quien se reunió con algunos de ellos (el viernes). "Fuentes calificadas indicaron a El Siglo que en esa reunión la cúpula militar expuso su "pliego", en el cual no se consideró la masiva protesta nacional del día anterior". Entre los hechos que el alto mando plantea, a las ya conocidas, estarían: "hay molestia por el discurso del Presidente Patricio Aylwin el 21 de mayo, el cual se considera "rebajó" a Pinochet, fue "agresivo" para el Ejército y

trató de "arrinconar" al alto mando militar; se rechaza cualquier "negociación" en torno a cambiar la actual norma de entregar a las FFAA (especialmente al Ejército) el diez por ciento de las ventas de Codelco.

Por otra parte, dice El Siglo en una reunión de Pinochet con su ex Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa, el primero habría manifestado su disconformidad con el candidato Manuel Feliú. "A Pinochet no le gusta, de frentón". Y Pinochet, agrega El Siglo, habría planteado la necesidad urgente de "salvar el vacío de poder" que se generaría si la dispersión de la derecha se mantiene y la Concertación obtiene mayoría en el Parlamento.

El Diario en una crónica política de Gonzalo Mizala señala sobre los hechos que "un analista informado aseguró que se trataba de la crónica de un acuartelamiento anunciado debido a las señales clarísimas que podían ser captadas en el ambiente en los días previos.

El Diario también destaca que según señaló una fuente calificada "el gran ausente -al menos físicamente para los periodistas-, fue el Ministro de Defensa, Patricio Rojas.

Según El Diario círculos informados aseguran que en los sucesos del viernes en ningún momento hubo acuartelamiento, sino que sólo dejaron que el país percibiera medidas de seguridad normales para una reunión del Alto Mando, salvo que algunas unidades dispusieron traslados de personal y equipo. "En ningún momento se pretendió producir un quiebre institucional" añadieron las fuentes.

Por último, El Diario indica que sin dudas, si bien ya pasaron las horas de tensión, nadie puede pensar que la situación llegó definitivamente a sus cauces normales mientras no se pueda asegurar que las inquietudes ya planteadas por los militares dejen de ser tales.

El presidente de Renovación Nacional, Andrés Allamand, manifestó que la democracia chilena es "extraordinariamente sólida" y, por ello, el desencuentro producido entre el Ejército y el Gobierno, en cuanto a las versiones de la movilización de tropas del viernes, tendrá que ser canalizado a través de los conductos institucionales.

No obstante, precisó que lo importante es que "las democracias son sólidas cuando los conflictos se encauzan mediante los conductos institucionales, y en nuestra democracia esos mecanismos son sólidos y fuertes".

Por otro lado, Allamand desestimó las declaraciones del coronel (R) Cristián Labbé, en cuanto a que el movimiento de tropas había sido un "tégase presente" por la situación de acoso de parte de los sectores políticos, ya que aquél "permanentemente se arroga la

representación de hecho del Ejército y se transforma en una especie de portavoz no autorizado del pensamiento y las necesidades de las FF.AA".

Por su parte, el presidente del Senado, Gabriel Valdés comentó respecto de los hechos que "el Gobierno no se ha sentido intranquilo. El que se ha sentido intranquilo es el Ejército, porque hay algunos hechos que lo molestan. Pero sostengo que las molestias que puedan tener algunos miembros del Ejército tiene que canalizarse a través de los cauces legales y constitucionales de un estado de derecho".

En tanto, el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Cristián Caro, lamentó la falta de claridad y transparencia con que actuó el Ejército. "Eso es lo peor, cuando no hay conocimiento de las cosas", puntualizó.

El Siglo señala que el diputado socialista Camilo Escalona, en dijo que "el movimiento de militares vuelve las cosas a la realidad, debe servir para borrar cierto exitismo y triunfalismo con el cual ha estado actuando la clase política en el último tiempo. El tema de la democratización del país todavía está puesto sobre la mesa".

Con respecto a los motivos del movimiento Escalona expresó "se está produciendo la transformación del Consejo de Generales en una especie de Sociedad Limitada, que tiene sus propios intereses corporativos y que actúa para defenderse por la vía de la fuerza, frente a las acciones del Poder Judicial; este fenómeno tiene similitud con otros que ocurren en el mundo. La actitud ética de Pinochet, es la misma actitud ética que tiene Pablo Escobar que se defiende mediante el uso de la fuerza para evitar la acción de la justicia. No puede haber un país estable cuando todavía continua pendiente un problema como éste":

En tanto, el Secretario General del Partido Comunista, Volodia Teitelboim, expresó, sobre los hechos, que "una vez más, hemos sido notificados de que Chile vive bajo libertad vigilada, en presión crónica, y ante el embate del golpismo en desarrollo hay que alertar al pueblo, superar el desaliento y movilizarse porque éste es un asunto de vida o muerte para Chile". Agregó "estamos encima de un volcán, y la reunión que tuvo Krauss con los generales fue un acto de guerra".

Las Ultimas Noticias reproduce las declaraciones del ex-candidato presidencial, Ricardo Lagos quien calificó de "insatisfactoria" la versión entregada por el Gobierno respecto de los acontecimientos del viernes último. Añadió que si existe molestia por parte de los institutos armados "hay canales regulares por los cuales se expresan. Me dicen, no me consta, que habría habido una reunión de generales donde estaban con uniformes de combate. !Yo no sé qué combate tiene este país para que alrededor del Ministerio de Defensa haya soldados con uniforme de combate!. Eso requiere una

explicación al país y es malo hacer como que las cosas no existen."

La Nación señala que uno de los pasajes más aplaudidos del discurso de Ricardo Lagos en la convención de la Concertación se centró en las relaciones cívico-militares y en la forma de resolver lo que llamó los "enclaves autoritarios".

"Tenemos que ser capaces -dijo- de avanzar para que los enclaves autoritarios tengan que ser removidos. Tenemos que comprometernos para que en el próximo período, el Presidente de Chile tenga la capacidad de nombrar los mandos militares de acuerdo a lo que él entienda que son los intereses de la patria".

Por su parte, en su discurso el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei señaló que entre lo más prioritario de lo pendiente era la necesidad de perfeccionar la democracia, terminando con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las FF.AA.

El Siglo plantea en su editorial que "el nuevo cuartelazo del Ejército ha demostrado la tremenda fragilidad del sistema y del Gobierno, y el fracaso rotundo de una política de cogobierno con el pinochetismo y sus poderes". "En los hechos el país se vio enfrentado a una virtual situación de fuerza militar desplegada, sin que las autoridades civiles del poder político reaccionaran e informaran públicamente a la ciudadanía de lo que estaba ocurriendo".

Agrega, El Siglo, que "es imposible comparar el comportamiento violento, represivo, odiosos y hasta carente de respeto mínimo que han tenido en estos días La Moneda con los partidos y movimientos que protestan por la pobreza y la falta de justicia, con el franco temor y silencio cómplice que se ha demostrado para enfrentar el nuevo cuartelazo militar".

Por último, dice El Siglo que "Chile una vez más, ha sido notificado de que no hay voluntad política para superar una situación real y objetiva: vivimos una forma civil de una dictadura militar".

En tanto, la editorial de La Nación manifiesta "que es muy probable que la estrategia que inspira las ^demostraciones de fuerza^ sea precisamente la de despertar los temores que los chilenos queremos dejar atrás y recordarnos que todavía estamos encañonados".

Para La Nación el país ha recorrido ya un trecho importante en el camino hacia la consolidación del régimen democrático, y no existen elementos objetivos que permitan suponer que este proceso pueda ser interrumpido.

Agrega, que a pesar de todo lo ocurrido, el país siguió trabajando normalmente, y se pudo comprobar que "los fantasmas del pasado no

nos paralizan".

Por último, La Nación indica que "necesitamos construir una democracia que no se deje asustar y que tenga la capacidad, llegado el caso, de convocar a todos los ciudadanos en su defensa".

Caso de la venta de "Valmoval":

La Tercera informa que un general y un coronel de Ejército en servicio activo, dos generales en retiro y tres civiles están citados a una entrevista con el magistrado Alejandro Solís, en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, quien investiga la venta de la empresa "Valmoval" al Ejército. La primera "entrevista" debió celebrarse el jueves de la semana pasada.

Consultado por La Tercera el abogado Fernando Uribe-Etxeverría, asesor legal de los oficiales y los civiles invitados a la "entrevista", acerca del tenor de ella, manifestó: "Es bastante inusual, por no decir inédito, que el tribunal invite a una "entrevista". Y agregó "Es sorprendente, además, que se haya actuado con tal sigilo presentando una querrela contra N.N. y después, orquestadamente, aparezcan el diario del gobierno y un diputado publicitando, con carácter de escándalo, la presentación de dicha denuncia".

Con respecto a la investigación de la Cámara, Uribe indicó que en el punto dos de su informe concluye que podrían existir eventuales irregularidades de carácter administrativo y que ellas podrían afectar el patrimonio de la Corfo. "Estas eventualidades las investigó la Contraloría General de la República y su conclusión es que no hay delitos. Si se hubiera comprobado alguno, debió la propia Contraloría denunciarlo al Juzgado del Crimen correspondiente. Por eso hablamos de una instrumentalización de este asunto, con fines ajenos a lo estrictamente jurídico".

Citación Genaro Arriagada

La Nación informa que el secretario general de la DC, Genaro Arriagada fue citado a declarar a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago por el fiscal militar, Sergio Cea Cienfuegos. Arriagada dijo al respecto "si lo que se quiere con esto es inhibir el derecho a criticar a la conducción del alto mando de las Fuerzas Armadas, es un error. He defendido eso toda mi vida, y nadie me va a cambiar de ese criterio".

Según La Nación el motivo de la citación podría estar en las opiniones del dirigente al diario El Mercurio el jueves pasado, o bien a las declaraciones a un canal de televisión, ese mismo día, sobre la posible incineración en el Ejército del último informe elaborado por el general Guillermo Garín.

Un "Top Secret" de La Segunda, el lunes, dice que un amplio sector

de oficiales del Ejército no se sintió cómodo con las medidas inusuales de protección por comandos, adoptadas el viernes pasado en las inmediaciones del edificio de las FF.AA. Ha trascendido que ellas pudieron evitarse si se hubiera sopesado maduramente la situación de tensión. Los símbolos de fuerza usados por los comandos durante su guardia de la reunión de generales, parecieron ostensibles, lo cual es ajeno a la eficacia. Además de innecesario, ello provoca, tal cual ocurrió, una expectación que no favorece la comprensión de la opinión pública que el Ejército reclama, en muchas y vitales materias con razón, en esta coyuntura.

Martes 1º de junio

Los diarios informan sobre una serie de reuniones de análisis de la situación, entre el Vicepresidente de la República, ministros y dirigentes políticos. Asimismo de entrevistas entre autoridades de Gobierno y el general Ballerino, y de este último con el general Pinochet. El Mercurio señala que el Ejército no informará sobre las conversaciones. Agrega que aún se mantiene algún grado de alerta en la institución castrense.

El Comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, presidió la ceremonia de aniversario de la Escuela de Infantería en tenida de combate. De acuerdo a informaciones de prensa, ésta se realizó bajo excepcionales medidas de seguridad.

El Ministro Secretario General de Gobierno, Enrique Correa, estimó que la tensión es decreciente, señalando que no hay negociaciones de ningún tipo con el Ejército, sino que el Gobierno busca resolver las inquietudes expresadas a través de los cauces institucionales. Señaló que lo que caracteriza a una democracia no es negar la existencia de inquietudes, sino aplicar en cada caso métodos institucionales. Agregó que no debe dramatizarse lo que no lo es. Descartó que el Ejército esté deliberando pues todas las inquietudes planteadas son institucionales y van a ser resueltas por esa vía. Desestimó, por último, que los acontecimientos puedan alterar la gira que realiza el Presidente de la República.

Los presidentes de los partidos de la Concertación plantearon su respaldo a la política seguida por el Gobierno en torno a la tensión con el Ejército.

El Comandante en Jefe de la Armada, almirante Jorge Martínez B., dijo que las relaciones cívico-militares son normales y las FF.AA., están "integradas ciento por ciento a la comunidad".

La Comisión Política de RN resolvió rechazar las modificaciones a la LOC de las FFAA propuestas por el Gobierno.

El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Reinaldo Altamirano,

descartó que el Gobierno haya presionado al organismo en la toma de decisiones.

El Ministro de Justicia, Francisco Cumplido, dijo que existen los antecedentes suficientes para la denuncia hecha por el Consejo de Defensa del Estado. Aclaró que aún si este Consejo retirara la denuncia, los tribunales podrían continuar el proceso por tratarse de un delito de acción pública. Descartó que las FF.AA. tengan aprensiones de ser juzgadas por un tribunal "no justo".

El presidente del Senado, Gabriel Valdés, dijo que de parte del Gobierno hay mucha preocupación por conocer las preocupaciones del Ejército, algunas muy justificadas y otras de carácter administrativo, por eso la situación se va a resolver muy luego.

El ex Ministro Secretario General de Gobierno, coronel (R) Cristián Labbé, expresó que el mejor aval de lo que ha dicho son las declaraciones y actitud del propio Gobierno: Los hechos se mantienen, la situación no ha variado, no hay señales de descompresión. Sin embargo, estimó que no está en juego el ordenamiento institucional.

El diputado DC Carlos Dupré, al comentar los juicios de Labbé aseveró que "declaraciones de esa naturaleza planteadas como una advertencia, más bien son una amenaza a la democracia y a la institucionalidad vigente.

El diputado DC Jorge Pizarro señaló que la Concertación estima que no existen motivos suficientes para que el Ejército esté inquieto. El Gobierno no tiene nada que negociar respecto de situaciones judiciales o legislativas pendientes. Pizarro manifestó que no se puede decir que el Ejército está deliberando en temas políticos. No obstante, el Gobierno deberá sostener las conversaciones necesarias para resolver las dificultades.

'Fuentes de la cúpula de la UDI' informaron que el Ejército "les comunicó a los partidos de derecha que no se metieran", porque el problema que tensan la relación entre el Ejecutivo y los generales es sólo entre estos dos actores. Esto implica -dice La Epoca- que para los militares no es parte del conflicto el cuadro que se creó desde RN con las declaraciones de Andrés Allamand.

El senador de RN Sergio Onofre Jarpa, quien preside la Comisión de Defensa del Senado, aseguró que esa instancia no está desarrollando ninguna labor de mediación ni de acercamiento entre las partes.

El diputado de la UDI Francisco Bartolucci dijo que el Gobierno tiene el deber de conversar seriamente con sus partidarios, exigiendo prudencia, y manejar la situación de modo que el Ejército no se sienta acosado ni vea y ánimo de persecución o revancha.

Para el diputado Víctor Pérez (UDI), el ministro Patricio Rojas

tiene culpas porque es un "perturbador, y no se sabe si actúa así o por cuenta del gobierno".

TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS:

El columnista Fernando Paulsen, en La Epoca, estima que la información del redoblamiento de la guardia en la reunión de generales, así como en las primeras informaciones del acuartelamiento, fueron cuidadosamente filtradas hacia la prensa por una serie de fuentes cercanas a los militares. La razón es obvia: ningún mensaje de presión pública puede tener éxito si no es percibido inmediatamente. Toda institución entrega, primero, una versión oficial que la proteja y, luego, se preocupa de la verdad. El viernes no fue una excepción. El Ejército sacó un comunicado donde no hacía referencia a nada de lo sucedido. El gobierno coincidió en que todo había sido normal.

Un editorial de El Mercurio dice que si bien la situación del viernes está superada, la opinión pública no está satisfecha con las explicaciones entregadas. Dice que el episodio parece terminar de una manera semejante a como ocurrió con el "ejercicio de enlace que tuvo en vilo al país hace dos años". Si las razones que lo provocaron siguen latentes nada puede garantizar que no vuelva a repetirse. Opina que las FFAA tiene motivos para sentirse incómodas, proponiendo que el Consejo de Seguridad Nacional sea la "válvula de escape" de estas tensiones de los "guardianes de la institucionalidad". Estima, además, indispensable el tino y el criterio del Gobierno para que cesen los motivos de inquietud militar.

Miércoles 2 de junio.

Crónicas de prensa informan que continúan las reuniones entre autoridades de Gobierno y representantes del Ejército. El Mercurio agrega que en La Moneda se confirmó que las unidades del Ejército permanecen en un cierto grado de alerta. Señala que se pudo determinar que las dos principales inquietudes del Ejército se refieren a la LOC de las FF.AA. y a algunos casos de DD.HH. En el primer caso los militares se oponen a cualquier modificación y el Gobierno insiste en que el asunto está en manos del Parlamento. Respecto del tema DD.HH. El Mercurio señala que se ha mencionado la posibilidad de una ley de punto final. Agrega que no ha habido reuniones entre el Ministro de Defensa y el Comandante en Jefe del Ejército, quedando las gestiones ante el Gobierno en manos del general Ballerino.

Una información de El Mercurio dice que la suscripción de un pacto de gobernabilidad de los sectores políticos, sería la salida más conveniente para la actual coyuntura. El acuerdo podría establecerse frente a la posibilidad de que se pierdan los equilibrios políticos si la derecha obtuviera una muy escasa representación parlamentaria; el hecho inquietaría a las FF.AA.

Una crónica de La Epoca señala que en círculos cercanos al Ejército se plantea la mantención del status quo hasta el regreso del Presidente Patricio Aylwin, para dar rumbo a las negociaciones que efectúa el Gobierno con el Ejército.

La Nación indica que fuentes parlamentarias de la Concertación y de la UDI coinciden en que la principal demanda del Ejército a las autoridades de Gobierno, para resolver la actual tensión, es el cierre definitivo del asunto de los cheques pagados al hijo del general Pinochet. Asimismo, la cúpula militar demandaría la dictación de una suerte de ley de "punto final" respecto de las violaciones a los DD.HH. anteriores a marzo de 1990; un desistimiento en la reforma a la ley orgánica de la FF.AA y la salida del Ministro de Defensa.

Un trascendido de La Tercera señala que fuentes oficiosas, que se niegan a hablar de "negociaciones", sostienen que lo acontecido es una demostración del sombrío estado de ánimo del Ejército ante lo que llaman "hostigamiento", que se ha venido manifestando de una y mil maneras desde que asumió el actual Gobierno. Algunos voceros castrenses estiman "curiosa" la determinación del Consejo de Defensa del Estado, porque si bien es autónomo, su presidente es nombrado por el Presidente de la República.

El Presidente de la República, Patricio Aylwin, aclaró en Oslo, Noruega, que el Gobierno no está negociando con el alto mando del Ejército. Señaló que no se aceptan petitorios de parte de las instituciones armadas que puedan significar actos de deliberación o de actividades en el campo político. Añadió que ello no impide que el Gobierno analice "por cursos regulares" cualquier situación que interese al funcionamiento de alguna rama de las FF.AA. o a otra organización del Estado. Atribuyó la acción militar del viernes pasado a un "exceso de susceptibilidad injustificada" respecto de la acción de un Poder del Estado independiente. Aseguró que en Chile impera una plena normalidad y las autoridades ejercen sus funciones. Agregó que al regreso de su gira respaldará la acción del Vicepresidente de la República y demás autoridades.

El Mercurio informa que el jefe de gabinete del Presidente de la República, Carlos Bascuñán, regresó anticipadamente de la gira en la que acompañaba al Primer mandatario. Se dijo que su vuelta se debía a asuntos particulares, sin embargo trascendió que el Presidente Aylwin habría decidido enviar a una persona de su absoluta confianza para evaluar en terreno la evolución de los hechos.

El Ministro de Defensa, Patricio Rojas, señaló que no es el momento de hablar sino de actuar, entenderse y solucionar las situaciones pendientes. El Ministro Rojas ha sostenido reuniones con los comandante en jefe de la Armada y la FACH.

Ricardo Lagos, tras reunirse con el Vicepresidente de la República

y otros dirigentes de la Concertación, opinó que la solución de las tensiones no puede ser demorada hasta el regreso del Presidente Aylwin. Dijo que lo que está ocurriendo daña la imagen del país y el "Ejército debe medir lo que está haciendo". Consultado si se estaba frente a un quiebre de la institucionalidad, dijo que eso debía preguntársele "a quienes generan esto". Estimó que el Ejército no tiene razones para movilizar tropas en la calle. Añadió que las FF.AA. tiene el monopolio de las armas, pero quien determina cuándo y cómo usarlas es la autoridad política.

El candidato de la Concertación, senador Eduardo Frei, dijo que lo que corresponde es mantener los canales institucionales. Llamó a la calma y a no dramatizar la situación.

Los dirigentes de RN, Andrés Allamand y Ricardo Rivadeneira, tras entrevistarse con el Vicepresidente de la República, entregaron su respaldo al Gobierno en el camino que ha seguido para solucionar el problema planteado, dentro de los marcos constitucionales. Andrés Allamand dijo que hay que buscar el momento oportuno para estudiar el planteamiento del Ejecutivo respecto de la LOC de las FF.AA. Estimó que las tensiones actuales impiden un análisis técnico y desapasionado de la materia. Opinó que debe actuarse con prudencia para superar las tensiones, siempre bajo el respeto del orden institucional. Descartó que la democracia esté en peligro por cuanto la transición cuenta con el respaldo de la mayoría de la población y de las propias FF.AA.

Francisco Javier Cuadra afirmó que el impasse entre el Ejército y el Gobierno es el tema más delicado de la agenda política. Agregó que los actuales hechos son más serio que el llamado ejercicio de enlace de 1990.

El diputado de la UDI, Andrés Chadwick, estimó que la solución de los problemas requiere de gran prudencia y realismo. Criticó la actuación del Ministro de Defensa en el manejo de las relaciones Gobierno-Ejército.

La Cámara de Diputados, a través de la mesa y los jefes de todas las bancadas, emitió un pronunciamiento donde se sostiene que las tensiones cívico-militares, son propias de un proceso de transición". Es normal que surjan situaciones que puedan producir inquietud o preocupación en diversos sectores de la sociedad, incluidas las FF.AA, que deben adaptarse a nuevas situaciones. Tales circunstancias no deben debilitar ni menos sobrepasar los cauces institucionales previstos para canalizar y resolver tales preocupaciones.

El Senado declaró que "no concibe y no podría aceptar que existiese una campaña en contra de una institución del Estado". "Todas las instituciones merecen la consideración necesaria para el desarrollo adecuado de sus funciones".

El senador Sergio Diez (RN) estimó inconveniente la discusión de una ley de "punto final" en un período electoral, porque en vez de producir la reconciliación aviva las cosas. Agregó que todo proceso contra uniformados, tiene que seguir su curso, y no hay forma de terminarlos, sino a través de las propias leyes.

El senador Arturo Alessandri manifestó que podría dictarse una ley amplia de amnistía, que dejara fuera algunos casos como el asesinato de Tucapel Jiménez y el degollamiento de tres profesionales.

El diputado DC, Guillermo Yunge, estimó que la declaración de la Cámara refleja una reafirmación de las instituciones democráticas y un consenso profundo entre partidarios del Gobierno y de la oposición, en cuanto al buen estado de las instituciones y que cualquier problema debe ser canalizarse por las vías regulares. Estimó preocupante que algunos sectores castrenses puedan ver que ante la crisis de la derecha, los militares deban tener un protagonismo político más directo.

El diputado del PS, Carlos Smok, opinó que el Ejército, por desgracia, no sabe expresar, todavía, sus preocupaciones por canales normales. Reconoció que hay temas por resolver, agregando que existe el ánimo e interés de que no quede nada pendiente que pueda ser materia de inquietud para sectores importantes de la población.

El senador de RN, Sebastián Piñera, propuso lo que considera una solución intermedia a la reforma de la LOC de las FFAA. En ella plantea que el Presidente de la República pueda tener iniciativa para llamar a retiro a oficiales de las FFAA, sometiendo su decisión a consideración de un organismo colegiado -mencionó el Consejo de Seguridad Nacional-. Ello aseguraría que dicha facultad fuera ejercida con seriedad y fundamento, resguardando tales decisiones de una posible politización. Fuentes militares consultadas por La Segunda señalaron que, específicamente el CSN, les parece un organismo inviable para estos efectos

El senador (d) y ex vicecomandante del Ejército, Santiago Sinclair aseguró que las tensiones Gobierno-Ejército son consecuencia de una sumatoria de acontecimientos que se arrastran en el tiempo:

- * Indultos a terroristas que han participado en hechos de sangre.
- * Apertura de nuevos procesos y reapertura de otros sobre infracciones a los DD.HH. que caen bajo la ley de Amnistía.
- * Demora en la tramitación de documentos y decretos que requiere el Ejército por parte del Ministerio de Defensa.
- * Acusaciones al Ejército de intromisión en la conducción de un partido político.
- * Insistencia en reformar leyes que afectan a las FF.AA.

Enfatizó Sinclair que la "subordinación" no está en cuestión, sí

preocupa que de alguna manera los mandos institucionales se vean disminuidos por acciones externas al quehacer militar. Denunció además que la institución castrense "está infiltrada", ya que de otra forma no se explica cómo un documento reservado que debía estar en la Casa Militar, ahora está en poder del diputado Jorge Schaulsohn.

El diputado del PPD, Jorge Schaulsohn, refutó que los documentos que presentó hayan significado infiltración al Ejército, declinando contestar sobre su origen el cual señaló estaría dispuesto a aclarar ante los tribunales. Afirmó que si él llega a revelar quién le entregó los documentos del Ejército referidos al caso de los cheques, "el senador Sinclair va a ser el primer sorprendido y no va a saber qué hacer con sus propias palabras".

El Ministro Secretario General de Gobierno, Enrique Correa, informó que la situación de tensión producida con el Ejército "se normalizará completamente en el día de hoy". Confirmó, además que durante el fin de semana el comandante en jefe del Ejército se reunió con el Vicepresidente de la República, Enrique Krauss. Afirmó que las inquietudes planteadas al Gobierno "ya están resueltas y las situaciones que pudieran haber llevado a confusión aclaradas. El Ministro Correa sostuvo que entre los asuntos (que preocupaban al Ejército) hay algunos que dicen relación con el Ministerio de Educación y el modo en que debe ser tratada en la Ley Orgánica la educación militar. "Otros diálogos", agregó, se refieren a decretos pendientes, los que están siendo apurados, y a la estabilidad de propiedades fiscales y de propiedades que son del Ejército."

En cuanto a los procesos pendientes en los tribunales, afirmó que dichos órganos judiciales "deben atenerse a la ley, y no corresponde a nosotros intervenir".

Por último, descartó que el Gobierno vaya a presentar un nuevo proyecto de ley relativo a materias orgánicas de las Fuerzas Armadas e indicó que a su juicio "no es posible que la ley orgánica -cuya reforma ya envió al Parlamento- pueda ser discutida pronto".

El candidato presidencial de la UDI, Jovino Novoa, señaló que una ley de "punto final" "si existe un espíritu constructivo, debería ser la culminación de un proceso donde realmente se ponga término a todas las situaciones de conflicto del pasado".

El candidato presidencial de RN, Manuel Feliú, sostuvo que los últimos sucesos demuestran que "todavía no está concluido el proceso de tránsito a la democracia". Añadió que los hechos acaecidos constutuyen "una situación que de alguna manera se venía gestionando desde hace bastante tiempo. Había situaciones complejas que no se manejaron bien". Agregó que hay canales institucionales de salida para el conflicto, los que requieren del esfuerzo tanto del Gobierno como de las Fuerzas Armadas.

El Comandante en Jefe de la FACH, general Ramón Vega, dijo que la los chilenos deben trabajar por el "perfeccionamiento de las instituciones democráticas". Agregó que la FACH se encuentra trabajando normalmente y llamó "a estar tranquilos ante situaciones coyunturales, muchas veces válidas, para que sean resueltas por los canales jerárquicos que corresponden".

El presidente de RN, Andrés Allamand, manifestó que había que avanzar rápido en una interpretación clara y categórica de la ley de amnistía de 1978. Señaló que el Gobierno ha impulsado la idea de que los procesos de la ley de amnistía deben ser investigados y con posterioridad aplicarse los efectos de la ley. A su juicio, este es un grave error porque lo que hace la ley de amnistía es borrar el delito. Por eso esta interpretación judicial seguida por el Gobierno es una fuente de perturbaciones y conflictos innecesarios.

El senador Sebastián Piñera planteó una fórmula alternativa a la moción del Ejecutivo para reformar la LOC de las FFAA. Propuso como norma general que los retiros de oficiales sean a propuesta del Comandante en Jefe y cursados por el Presidente de la República (régimen actual), pero que, en forma extraordinaria y con motivo fundado, sean con consulta a un cuerpo colegiado, como el Consejo de Seguridad Nacional. A juicio de Piñera, con esta fórmula no prosperaría ninguna iniciativa del Presidente que no estuviera fundada en hechos sólidos y, por tanto, no tendría cabida un intento de politización de las FFAA. Las fuentes militares consultadas por La Segunda señalaron que, específicamente el CSN, les parece un organismo inviable para estos efectos

La Epoca informa que los tribunales han reabierto treinta procesos por violaciones a los DD.HH. durante 1993, que se incluyen en un total de doscientas causas que instruye el Poder Judicial desde que la Comisión Verdad y Reconciliación emitió su informe (marzo, 1991) La Epoca agrega que efectivamente en numerosos casos, al menos veinte, militares han sido citados a declarar; pero subraya que se trata de los mismos que ya han prestado declaración en casos como el secuestro de Alfonso Chanfreau.

Por otra parte, La Nación señala que según diputados de oposición, militares han filtrado su preocupación por la presunta filiación socialista del titular del 5º Juzgado del Crimen, Alejandro Solís, quien aparte de ser un magistrado severo habría sufrido algunas consecuencias inmediatas del golpe de 1973.

La Nación informa que el Consejo de Defensa del Estado concluyó que los terrenos de Villa Grimaldi fueron vendidos a familiares del ex director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel en menos de la mitad de su valor. Por ello solicitó que se amplíe el auto de procesamiento contra el militar y otras cinco personas por el delito de fraude al fisco.

En otra nota La Nación indica que el abogado Nelson Caucoto, querellante en el proceso por la detención y desaparición de los

hermanos Juan Carlos y Jorge Elías Andrónico Antequera, anunció que solicitará la ampliación del auto de procesamiento contra el coronel Fernando Laureani, por el secuestro de Luis Francisco González Manríquez, ocurrido el mismo día de los hermanos Andrónico.

Encuesta de opinión pública

Un sondeo telefónico realizado el lunes 31 por Asimerc a 226 personas en Santiago, señala que el 92% de los entrevistados estaba enterado de los hechos.

Un 64.4% señaló que no era una buena manera de actuar la reacción del Ejército y el 27.8% estima que es "una buena manera" de actuar.

Un 35.5% de los entrevistados consideró la reunión del viernes como algo normal. En tanto, para el 54.8% estima que tuvo "otras motivaciones" y el 9.6% no contestó.

Luego el 64.4 estimó que los sucesos no son una buena manera de expresar una posición por parte del Ejército. El 27.8% piensa que sí y el 7.6% no respondió.

Además el 48% afirma que fueron por un problema puntual y el 47.6% que obedecieron a un problema de fondo. El 4.3% no contestó.

El 50% se declara "insatisfecho" con la reacción del Gobierno frente a los sucesos. El 38.4% se considera "satisfecho" y el 11.5% no opinó.

En tanto, el 64.4% piensa que en este tipo de situaciones "es mejor informar inmediatamente" y el 31.2 sostiene que es mejor hacerlo "posteriormente, una vez solucionado todo el problema"

Por último, un 43.2% de los entrevistados piensa que las relaciones con las FF. AA. en un eventual Gobierno de Eduardo Frei, serán iguales, el 39.9% cree que serán mejores. El 10.5% afirma que serán peores.

De los entrevistados, el 58.8% se define como partidario del Gobierno. El 24.5% se declara opositor y el 16.6% no responde.

TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS:

La Tercera, en su editorial, estima que de lo ocurrido el viernes sólo ha quedado como señales, pero que han causado preocupación en lo que respecta a la consolidación y expansión del sistema democrático. A pesar de los comunicados, la opinión pública tiene claro que hay una fuerte tensión y que se llevan a cabo reuniones para poner término a ella. Se está -dice La Tercera- frente a una especie de comedia del absurdo, ya que los hechos se encargan de

desmentir las versiones oficiales. Pareciera recomendable que en el diálogo iniciado se aborden no sólo los problemas coyunturales que motivaron la acción del Ejército; es preciso que en esta instancia se cree, además, un mecanismo que permita resolver cualesquiera problemas futuros que puedan afectar la normal relación cívico-militar, pues a juzgar por lo acontecido, los canales existentes "- como el Consejo de Seguridad Nacional-" han demostrado su escasa viabilidad para enfrentar situaciones críticas.

Víctor Maldonado, columnista de La Nación, señala que si una demostración de fuerza se realiza cuando no se debe o resulta incomprensible, termina siendo una demostración de debilidad. Dadas las condiciones actuales sólo queda una salida a la crisis temporal de relaciones: el respaldo explícito e irrestricto a las normas definidas en la Constitución y las leyes.

El Diario plantea que se han logrado "avances" en los contactos entre Gobierno y Ejército, "pese a que en La Moneda se niega la negociación".

jueves 3 de junio de 1993:

"Altas fuentes de las FF.AA." citadas por El Mercurio señalan que el Gobierno y el Ejército han logrado -en principio- acuerdos en algunos puntos que estaban en conversación. Según trascendió las bases de solución consultan la voluntad de mantener "stand by" las peticiones de indultos pendientes elevadas por reos extremistas con penas ejecutoriadas, entre los que se cuentan participantes en el atentado al general Pinochet en 1986. Además habría consenso en el respeto a la plena autonomía del Poder Judicial en los hechos que pudieran ser calificados como atropellos a los Derechos Humanos, reconociéndose el imperio de la vigencia de la Ley de Amnistía para los casos en que corresponda su aplicación.

Asimismo, no habría mayor cuestionamiento de una agilización de los trámites que habitualmente se realizan en el Ministerio de Defensa, en la Subsecretaría de Guerra, en cuanto a la documentación y decretos que son de su incumbencia.

Uno de los puntos calificados como de "segundo orden" es el referente al trato protocolar dado a las autoridades de las FF.AA. y Carabineros. Este aspecto estaría sujeto a cambios futuros por parte de la Dirección de Ceremonial y protocolo de la Cancillería.

Se señaló que en ningún momento se planteó al Ejecutivo la idea de una eventual renuncia del ministro de Defensa.

El Mercurio dice que el general Pinochet sostendría una entrevista con el Presidente Aylwin, al regreso de éste de su gira. De acuerdo a sus resultados, viajaría a la zona norte del país para revistar el primer cuerpo del Ejército.

El Vicepresidente de la República, Enrique Krauss, afirmó que jamás el Gobierno ha practicado una política de hostigamiento en contra de las FF.AA. y, particularmente, del Ejército y señaló que la tensión con la institución castrense ha decrecido.

Aseguró que las medidas dispuestas por el alto mando institucional del Ejército y que dicen relación con un estado de alerta menor o alistamiento de las unidades serían "desactivadas" en las próximas horas o días, según se les informó.

Respecto de la denuncia del general (R) Sinclair sobre una eventual infiltración del Ejército, dijo que se trataba de una "apreciación que acusa justificadamente una molestia respecto de situaciones que se deben ventilar en los canales formales".

Por otra parte, y tal como lo ha planteado el Presidente Aylwin, aclaró que efectuar conversaciones con el Ejército no significa estar en un proceso de negociación, porque no puede haber negociaciones de carácter político con instituciones dependientes del Ejecutivo.

Aclaró que las inquietudes del Ejército, que calificó de legítimas, han sido analizadas por las vías institucionales y que las respuestas serán las medidas que se han aplicado o se van a adoptar.

Agregó que todos los puntos que no son canalizados institucionalmente no corresponden a un pronunciamiento que deba ser considerado.

Consultado acerca si el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para zanjar los casos de Derechos Humanos que afectan a militares ("ley de punto final"), Krauss aseguró que el Ejecutivo no contempla en su agenda legislativa una iniciativa de esa naturaleza. Dijo que ese es un tema que ha sido planteado a nivel parlamentario y de especulaciones periodísticas.

Respecto de si el Gobierno analiza la posibilidad de citar al Consejo de Seguridad Nacional, indicó que esa es una cuestión que podría ser analizada si la seguridad del país estuviera afectada, de acuerdo a la normativa del artículo 96 de la Constitución, y que como no se dan los requisitos, la medida no se justifica.

El Ministro Secretario General de Gobierno, Enrique Correa, aseguró que las inquietudes planteadas por el Ejército han quedado bien resueltas, que la situación ha sido completamente normalizada y que ello se ha hecho con pleno respeto a la autoridad del Presidente de la República, a las facultades del Gobierno, a la Constitución y a la dignidad del Ejército.

El presidente de RN, Andrés Allamand, aseguró que Chile no necesita

ningún pacto de gobernabilidad. "El pacto de gobernabilidad del país es el respeto a la institucionalidad política y a las normas de la Constitución. Las democracias funcionan particularmente a partir de ese respeto a la institucionalidad política y, en consecuencia, este tema de los pactos políticos de mayor o menor gobernabilidad son irrelevantes frente a un concepto de fondo.

Aseguró estar en desacuerdo con la visión de algunos sectores en cuanto a que la situación de la centroderecha es tan difícil que no llegará a obtener una adecuada representación parlamentaria en el próximo período. Agregó que cualquiera sea el juego de mayorías o minorías, existirá por sobre todo la voluntad de mantener permanentemente encauzado el sistema democrático.

El presidente de la UDI, Jovino Novoa, manifestó que su colectividad confiaba en que cualquiera sea el signo político de los parlamentarios del próximo Congreso, "haya conciencia de que es mejor solucionar los conflictos a crearlos". Estimó que más importante que pactos de gobernabilidad es que el sector logre los acuerdos necesarios para obtener mayoría parlamentaria.

El Presidente del PDC, diputado Gutenberg Martínez, dijo desconocer alguna propuesta sobre el llamado pacto de gobernabilidad. Dijo, asimismo, que la DC es contraria a la dictación de una nueva amnistía. Desmintió que la Concertación, de obtener una alta mayoría en el Congreso, desmantelaría la Constitución. Los cambios que la Concertación ha impulsado, no pretenden tal desmantelamiento, sino simplemente cumplir con el programa de gobierno de la coalición.

Portavoces militares citados por El Mercurio desestimaron una presunta infiltración del Ejército, como denunciara el senador (d) Santiago Sinclair. Según los informantes, el documento presentado por el diputado Schaulsohn habría sido presuntamente hurtado y fotocopiado pagándose por dicha maniobra.

El presidente del PS, Germán Correa, dijo que las opiniones vertidas por el diputado Schaulsohn, son declaraciones que hace el diputado en su calidad de tal, y de las cuales es el único responsable.

El vicepresidente del PDC, Felipe Sandoval, dijo que estimaba las declaraciones del general Sinclair como opiniones personales, ya que no puede atribuirse la representación del Ejército que tiene conductos regulares para expresarse. Agregó que entre los asuntos planteados por el senador (d) Sinclair hay algunos de carácter administrativo que se solucionarán por el conducto regular y, otros, relacionados con violaciones a los derechos humanos, por el conducto judicial. Afirmó que en esa materia "nos hemos regido por la norma legal dictada por el anterior gobierno y lo seguiremos haciendo".

El presidente del PPD, Sergio Bitar, calificó de delicadas las declaraciones del senador (d) Sinclair, afirmando que no puede involucrar a una institución como el Ejército en denuncias de infiltración, agregando que si tiene antecedentes debe darlos a conocer para iniciar la investigación.

El presidente de RN, Andrés Allamand, consideró gravísimo que el senador (d) Sinclair haya admitido que el Ejército ha sido infiltrado.

El secretario general del PC, Volodia Teitelboim, reiteró que el retiro del general Pinochet sería un acto muy positivo para Chile, ya que evolvería la tranquilidad al país y permitiría afrontar la actual crisis cívico militar con mayor normalidad. Llamó a la opinión pública y a los partidos políticos a asumir una postura clara: "No es la rendición respecto de las presiones del Ejército la que pueda solucionar el problema". Respecto de las inquietudes del Ejército, indicó que es impropio de la institución castrense y que no puede pretender gozar de privilegios respecto de cualquier otro organismo o personas al oponerse a que ciertos casos puedan ser objeto de investigación judicial.

El senador de RN, Sergio O. Jarpa, estimó que existe un plan de hostigamiento permanente al Ejército que se manifiesta en diversas iniciativas, publicaciones y en campañas de prensas y TV. Dijo que de seguir esta campaña habría que preguntarse "cuál es el propósito que tienen sectores de Gobierno frente al Ejército y cuál es el alcance de toda la campaña. Manifestó que dicha campaña se manifiesta en una serie de procesos, querellas y denuncias permanentes relacionadas con situaciones de derechos humanos, "que muchas veces ya han sido juzgadas y están bajo el imperio de la ley de amnistía. Concluyó señalando que si no fuera porque el general Pinochet está al mando del Ejército, "las cosas habrían tomado un rumbo muy distinto".

El presidente del Senado, Gabriel Valdés, dijo que no se justifica convocar al Consejo de Seguridad Nacional, por la situación producida en el Ejército. Aseguró que las inquietudes manifestadas por el Ejército no comprometen la estabilidad y que, por lo demás, el Ejecutivo la está canalizando debidamente.

El senador de RN, Sergio O. Jarpa, consideró la fórmula propuesta por el senador Piñera como absolutamente inconveniente, pues significaría que los comandantes en jefes de otras instituciones voten el CSN respecto de situaciones internas de otra de ellas, lo que significaría distanciamiento, conflicto o separación de los mandos institucionales.

El senador (d) Sergio Fernández planteó que la LOC de las FFAA debe seguir tal cual está.

La UDI rechazó toda posibilidad de modificar la LOC de las FFAA,

descartando de paso la propuesta de Sebastián Piñera.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -línea fundadora (fracción escindida de la organización que dirige Sola Sierra)- rechazó la posibilidad de cualquier nueva amnistía. Lo mismo planteó la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

El senador del PS, Hernán Vodanovic, afirmó que la fórmula para superar la crisis entre el Ejército y el Gobierno no debe alentar un entusiasmo excesivo en la medida que no se subsane o reparen los problemas o hechos reales o imaginarios y subjetivos que perturban esas relaciones. Estimó que cuando regrese el presidente de la República se podrá tener una apreciación más definitiva de la situación y la manera en que el Gobierno a través de su primera autoridad piensa afrontar un problema que no es coyuntural sino muestra ciertos visos de permanencia. Afirmó que estos hechos deben invitar a la meditación de los distintos sectores políticos, desde luego del Ejército porque ha tenido una actitud que la ciudadanía no comparte y sobre todo alentar la esperanza de llegar a soluciones definitivas en el más breve plazo de los problemas reales.

El presidente subrogante de la Corte Suprema, Enrique Zurita, se manifestó partidario de una nueva ley de amnistía si esta significara mirar hacia el futuro y no al pasado.

La periodista María Eugenia Oyarzún señala en la Tercera que el Ejército se encuentra desarrollando sus actividades normales, pero muy atento y esperando los resultados de las conversaciones que se han producido en los últimos días.

La "falta de canales de comunicación adecuados con el Gobierno" es, a juicio de los sectores castrenses, la principal razón de la actual crisis del Ejército con el Ejecutivo. Las fuentes aclaran que no se han sostenido "negociaciones" con el Gobierno, porque esa no es su misión, aunque se admitió que los militares presentaron sus posiciones y propusieron soluciones.

Dice que la molestia del Ejército se encontraba latente desde el 21 de mayo, cuando el Presidente Aylwin leyó su mensaje en el Congreso nacional y en presencia de los comandantes en jefes de las FFAA. "Fue-dicen los sectores castrenses- un discurso poco grato, en que a lo largo de tres horas y principalmente durante 20 minutos debieron "soportar estoicamente" muchas críticas y ningún reconocimiento a su labor durante el presente mandato presidencial-

"Fuentes importantes del Ejército" han reiterado que ni el comandante en jefe de la institución ni quienes integran el alto mando buscan ni quieren el poder ni el Gobierno ni causar conflictos en la institucionalidad vigente, sino que, por el contrario, lo que anhelan es que los dejen trabajar en paz.

TRATAMIENTO EN LOS MEDIOS

Un editorial de El Mercurio señala que en toda nación democrática las Fuerzas Armadas dependen del Jefe de Estado. Sin embargo, los poderes que ejerce el Jefe del Estado sobre ellas son más bien nominales, al existir también en todos los países, disposiciones complementarias que fijan de manera más precisa la relación entre el poder civil y su instrumento militar. En el caso de nuestro país, el mando operacional de las FF.AA. radica en el Presidente de la República, asesorado por el Consejo de Seguridad Nacional. En cuanto a la LOC de las FF.AA. y carabineros, que tanta preocupa al Primer Mandatario, su redacción actual fue el fruto de largas negociaciones, a lo que no fue ajeno el actual gobierno.

La prudencia aconseja no introducir cambios en una relación político-militar que ha demostrado ser conveniente. La opinión pública podría interpretar el sentido de las modificaciones que se pretenden introducir como un intento de la coalición gobernante de subordinar a la jerarquía militar de las FF.AA. de Chile. Más delicado resultaría, por cierto, que esa percepción se generalizara dentro de los institutos castrenses.

Con todo, no resulta fácil comprender el empeño que ha puesto el Ejecutivo en impulsar esta reforma, pues, como es sabido, la iniciativa no tiene posibilidades de ser aprobada en el Parlamento.

El editorial de El País sostiene que la reunión de generales del viernes pasado no puede ser interpretada sino como una reacción explicable y legítima frente a hechos que han repercutido muy hondo al interior de esa rama de las FF.AA. Es cierto que la Constitución ha previsto los cauces adecuados para manifestar las inquietudes de las instituciones armadas. Así, por ejemplo, el Consejo de Seguridad nacional ha funcionado a la perfección en otras ocasiones. Sin embargo, ninguna de las instituciones pensadas en la Constitución puede funcionar adecuadamente para tal efecto si no existe confianza recíproca entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno.



TENSIONES CIVICO-MILITARES
HECHOS Y OPINIONES EN LA PRENSA
1º Y 2 de junio de 1993

Martes 1º de junio

INFORMACIONES Y OPINIONES:

Los diarios informan sobre una serie de reuniones de análisis de la situación, entre el Vicepresidente de la República, ministros y dirigentes políticos. Asimismo de entrevistas entre autoridades de Gobierno y el general Ballerino, y de este último con el general Pinochet. El Mercurio señala que el Ejército no informará sobre las conversaciones. Agrega que aún se mantiene algún grado de alerta en la institución castrense.

El Comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, presidió la ceremonia de aniversario de la Escuela de Infantería en tenida de combate. De acuerdo a informaciones de prensa, ésta se realizó bajo excepcionales medidas de seguridad.

El Ministro Secretario General de Gobierno, Enrique Correa, estimó que la tensión es decreciente, señalando que no hay negociaciones de ningún tipo con el Ejército, sino que el Gobierno busca resolver las inquietudes expresadas a través de los cauces institucionales. Señaló que lo que caracteriza a una democracia no es negar la existencia de inquietudes, sino aplicar en cada caso métodos institucionales. Agregó que no debe dramatizarse lo que no lo es. Descartó que el Ejército esté deliberando pues todas las inquietudes planteadas son institucionales y van a ser resueltas por esa vía. Desestimó, por último, que los acontecimientos puedan alterar la gira que realiza el Presidente de la República.

Los presidentes de los partidos de la Concertación plantearon su respaldo a la política seguida por el Gobierno en torno a la tensión con el Ejército.

El Comandante en Jefe de la Armada, almirante Jorge Martínez B., dijo que las relaciones cívico-militares son normales y las FF.AA., tan "Integradas ciento por ciento a la comunidad".

La Comisión Política de RN resolvió rechazar las modificaciones a la LOC de las FFAA propuestas por el Gobierno.

El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Reinaldo Altamirano, descartó que el Gobierno haya presionado al organismo en la toma de decisiones.

El Ministro de Justicia, Francisco Cumplido, dijo que existen los antecedentes suficientes para la denuncia hecha por el Consejo de Defensa del Estado. Aclaró que aún si este Consejo retirara la denuncia, los tribunales podrían continuar el proceso por tratarse de un delito de acción pública. Descartó que las FF.AA. tengan aprensiones de ser juzgadas por un tribunal "no justo".

El presidente del Senado, Gabriel Valdés, dijo que de parte del Gobierno hay mucha preocupación por conocer las preocupaciones del Ejército, algunas muy justificadas y otras de carácter administrativo, por eso la situación se va a resolver muy luego.

El ex Ministro Secretario General de Gobierno, coronel (R) Cristián Labbé, expresó que el mejor aval de lo que ha dicho son las declaraciones y actitud del propio Gobierno: Los hechos se mantienen, la situación no ha variado, no hay señales de descompresión. Sin embargo, estimó que no está en juego el ordenamiento institucional.

El diputado DC Carlos Dupré, al comentar los juicios de Labbé aseveró que "declaraciones de esa naturaleza planteadas como una advertencia, más bien son una amenaza a la democracia y a la institucionalidad vigente.

El diputado DC Jorge Pizarro señaló que la Concertación estima que no existen motivos suficientes para que el Ejército esté inquieto. El Gobierno no tiene nada que negociar respecto de situaciones judiciales o legislativas pendientes. Pizarro manifestó que no se puede decir que el Ejército está deliberando en temas políticos. No obstante, el Gobierno deberá sostener las conversaciones necesarias para resolver las dificultades.

"Fuentes de la cúpula de la UDI" informaron que el Ejército "les comunicó a los partidos de derecha que no se metieran", porque el problema que tensan la relación entre el Ejecutivo y los generales es sólo entre estos dos actores. Esto implica -dice La Epoca- que para los militares no es parte del conflicto el cuadro que se creó desde RN con las declaraciones de Andrés Allamand.

El senador de RN Sergio Onofre Järpa, quien preside la Comisión de Defensa del Senado, aseguró que esa instancia no está desarrollando ninguna labor de mediación ni de acercamiento entre las partes.

El diputado de la UDI Francisco Bartolucci dijo que el Gobierno tiene el deber de conversar seriamente con sus partidarios, exigiendo prudencia, y manejar la situación de modo que el Ejército no se sienta acosado ni vea y ánimo de persecución o revancha.

Para el diputado Víctor Pérez (UDI), el ministro Patricio Rojas tiene culpas porque es un "perturbador, y no se sabe si actúa así o por cuenta del gobierno".

TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS:

El columnista Fernando Paulsen, en La Epoca, estima que la información del redoblamiento de la guardia en la reunión de generales, así como en las primeras informaciones del acuartelamiento, fueron cuidadosamente filtradas hacia la prensa por una serie de fuentes cercanas a los militares. La razón es

obvia: ningún mensaje de presión pública puede tener éxito si no es percibido inmediatamente. Toda institución entrega, primero, una versión oficial que la proteja y, luego, se preocupa de la verdad. El viernes no fue una excepción. El Ejército sacó un comunicado donde no hacía referencia a nada de lo sucedido. El gobierno coincidió en que todo había sido normal.

Un editorial de El Mercurio dice que si bien la situación del viernes está superada, la opinión pública no está satisfecha con las explicaciones entregadas. Dice que el episodio parece terminar de una manera semejante a como ocurrió con el "ejercicio de enlace que tuvo en vilo al país hace dos años". Si las razones que lo provocaron siguen latentes nada puede garantizar que no vuelva a repetirse. Opina que las FF.AA. tiene motivos para sentirse incómodas, proponiendo que el Consejo de Seguridad Nacional sea la "válvula de escape" de estas tensiones de los "guardianes de la institucionalidad". Estima, además, indispensable el tino y el criterio del Gobierno para que cesen los motivos de inquietud militar.

Miércoles 2 de junio.

INFORMACIONES Y OPINIONES:

Crónicas de prensa informan que continúan las reuniones entre autoridades de Gobierno y representantes del Ejército. El Mercurio agrega que en La Moneda se confirmó que las unidades del Ejército permanecen en un cierto grado de alerta. Señala que se pudo determinar que las dos principales inquietudes del Ejército se refieren a la LOC de las FF.AA. y a algunos casos de DD.HH. En el primer caso los militares se oponen a cualquier modificación y el Gobierno insiste en que el asunto está en manos del Parlamento. Respecto del tema DD.HH. El Mercurio señala que se ha mencionado la posibilidad de una ley de punto final. Agrega que no ha habido reuniones entre el Ministro de Defensa y el Comandante en Jefe del Ejército, quedando las gestiones ante el Gobierno en manos del general Ballerino.

Una información de El Mercurio dice que la suscripción de un pacto de gobernabilidad de los sectores políticos, sería la salida más conveniente para la actual coyuntura. El acuerdo podría establecerse frente a la posibilidad de que se pierdan los equilibrios políticos si la derecha obtuviera una muy escasa representación parlamentaria; el hecho inquietaría a las FF.AA.

Una crónica de La Epoca señala que en círculos cercanos al Ejército se plantea la mantención del status quo hasta el regreso del Presidente Patricio Aylwin, para dar rumbo a las negociaciones que efectúa el Gobierno con el Ejército.

La Nación indica que fuentes parlamentarias de la Concertación y de la UDI coinciden en que la principal demanda del Ejército a las

autoridades de Gobierno, para resolver la actual tensión, es el cierre definitivo del asunto de los cheques pagados al hijo del general Pinochet. Asimismo, la cúpula militar demandaría la dictación de una suerte de ley de "punto final" respecto de las violaciones a los DD.HH. anteriores a marzo de 1990; un desistimiento en la reforma a la ley orgánica de la FF.AA y la salida del Ministro de Defensa.

Un trascendido de La Tercera señala que fuentes officiosas, que se niegan a hablar de "negociaciones", sostienen que lo acontecido es una demostración del sombrío estado de ánimo del Ejército ante lo que llaman "hostigamiento", que se ha venido manifestando de una y mil maneras desde que asumió el actual Gobierno. Algunos voceros castrenses estiman "curiosa" la determinación del Consejo de Defensa del Estado, porque si bien es autónomo, su presidente es nombrado por el Presidente de la República.

El Presidente de la República, Patricio Aylwin, aclaró en Oslo, Noruega, que el Gobierno no está negociando con el alto mando del Ejército. Señaló que no se aceptan petitorios de parte de las instituciones armadas que puedan significar actos de deliberación o de actividades en el campo político. Añadió que ello no impide que el Gobierno analice "por cursos regulares" cualquier situación que interese al funcionamiento de alguna rama de las FF.AA. o a otra organización del Estado. Atribuyó la acción militar del viernes pasado a un "exceso de susceptibilidad injustificada" respecto de la acción de un Poder del Estado independiente. Aseguró que en Chile impera una plena normalidad y las autoridades ejercen sus funciones. Agregó que al regreso de su gira respaldará la acción del Vicepresidente de la República y demás autoridades.

El Mercurio informa que el jefe de gabinete del Presidente de la República, Carlos Bascuñán, regresó anticipadamente de la gira en la que acompañaba al Primer mandatario. Se dijo que su vuelta se debía a asuntos particulares, sin embargo trascendió que el Presidente Aylwin habría decidido enviar a una persona de su absoluta confianza para evaluar en terreno la evolución de los hechos.

El Ministro de Defensa, Patricio Rojas, señaló que no es el momento de hablar sino de actuar, entenderse y solucionar las situaciones pendientes. El Ministro Rojas ha sostenido reuniones con los comandante en jefe de la Armada y la FACH.

Ricardo Lagos, tras reunirse con el Vicepresidente de la República y otros dirigentes de la Concertación, opinó que la solución de las tensiones no puede ser demorada hasta el regreso del Presidente Aylwin. Dijo que lo que está ocurriendo daña la imagen del país y el "Ejército debe medir lo que está haciendo". Consultado si se estaba frente a un quiebre de la institucionalidad, dijo que eso debía preguntársele "a quienes generan esto". Estimó que el Ejército no tiene razones para movilizar tropas en la calle. Añadió

que las FF.AA. tiene el monopolio de las armas, pero quien determina cuándo y cómo usarlas es la autoridad política.

El candidato de la Concertación, senador Eduardo Frei, dijo que lo que corresponde es mantener los canales institucionales. Llamó a la calma y a no dramatizar la situación.

Los dirigentes de RN, Andrés Allamand y Ricardo Rivadeneira, tras entrevistarse con el Vicepresidente de la República, entregaron su respaldo al Gobierno en el camino que ha seguido para solucionar el problema planteado, dentro de los marcos constitucionales. Andrés Allamand dijo que hay que buscar el momento oportuno para estudiar el planteamiento del Ejecutivo respecto de la LOC de las FF.AA. Estimó que las tensiones actuales impiden un análisis técnico y desapasionado de la materia. Opinó que debe actuarse con prudencia para superar las tensiones, siempre bajo el respeto del orden institucional. Descartó que la democracia esté en peligro por tanto la transición cuenta con el respaldo de la mayoría de la población y de las propias FF.AA.

Francisco Javier Cuadra afirmó que el impasse entre el Ejército y el Gobierno es el tema más delicado de la agenda política. Agregó que los actuales hechos son más serio que el llamado ejercicio de enlace de 1990.

El diputado de la UDI, Andrés Chadwick, estimó que la solución de los problemas requiere de gran prudencia y realismo. Criticó la actuación del Ministro de Defensa en el manejo de las relaciones Gobierno-Ejército.

La Cámara de Diputados, a través de la mesa y los jefes de todas las bancadas, emitió un pronunciamiento donde se sostiene que las tensiones cívico-militares, son propias de un proceso de transición". Es normal que surjan situaciones que puedan producir inquietud o preocupación en diversos sectores de la sociedad, incluidas las FF.AA, que deben adaptarse a nuevas situaciones. Las circunstancias no deben debilitar ni menos sobrepasar los cauces institucionales previstos para canalizar y resolver tales preocupaciones.

El Senado declaró que "no concibe y no podría aceptar que existiese una campaña en contra de una institución del Estado". "Todas las instituciones merecen la consideración necesaria para el desarrollo adecuado de sus funciones".

El senador Sergio Diez (RN) estimó inconveniente la discusión de una ley de "punto final" en un período electoral, porque en vez de producir la reconciliación aviva las cosas. Agregó que todo proceso contra uniformados, tiene que seguir su curso, y no hay forma de terminarlos, sino a través de las propias leyes.

El senador Arturo Alessandri manifestó que podría dictarse una ley amplia de amnistía, que dejara fuera algunos casos como el asesinato de Tucapel Jiménez y el degollamiento de tres profesionales.

El diputado DC, Guillermo Yunge, estimó que la declaración de la Cámara refleja una reafirmación de las instituciones democráticas y un consenso profundo entre partidarios del Gobierno y de la oposición, en cuanto al buen estado de las instituciones y que cualquier problema debe ser canalizarse por las vías regulares. Estimó preocupante que algunos sectores castrenses puedan ver que ante la crisis de la derecha, los militares deban tener un protagonismo político más directo.

El diputado del PS, Carlos Smok, opinó que el Ejército, por desgracia, no sabe expresar, todavía, sus preocupaciones por canales normales. Reconoció que hay temas por resolver, agregando que existe el ánimo e interés de que no quede nada pendiente que pueda ser materia de inquietud para sectores importantes de la población.

El senador de RN, Sebastián Piñera, propuso lo que considera una solución intermedia a la reforma de la LOC de las FFAA. En ella plantea que el Presidente de la República pueda tener iniciativa para llamar a retiro a oficiales de las FFAA, sometiendo su decisión a consideración de un organismo colegiado -mencionó el Consejo de Seguridad Nacional-. Ello aseguraría que dicha facultad fuera ejercida con seriedad y fundamento, resguardando tales decisiones de una posible politización. Fuentes militares consultadas por La Segunda señalaron que, específicamente el CSN, les parece un organismo inviable para estos efectos

El senador (d) y ex vicecomandante del Ejército, Santiago Sinclair aseguró que las tensiones Gobierno-Ejército son consecuencia de una sumatoria de acontecimientos que se arrastran en el tiempo:

- Indultos a terroristas que han participado en hechos de sangre.
- Apertura de nuevos procesos y reapertura de otros sobre infracciones a los DD.HH. que caen bajo la ley de Amnistía.
- * Demora en la tramitación de documentos y decretos que requiere el Ejército por parte del Ministerio de Defensa.
- * Acusaciones al Ejército de intromisión en la conducción de un partido político.
- * Insistencia en reformar leyes que afectan a las FF.AA.

Enfatizó Sinclair que la "subordinación" no está en cuestión, sí preocupa que de alguna manera los mandos institucionales se vean disminuidos por acciones externas al quehacer militar. Denunció además que la institución castrense "está infiltrada", ya que de otra forma no se explica cómo un documento reservado que debía estar en la Casa Militar, ahora está en poder del diputado Jorge Schaulsohn.

El diputado del PPD, Jorge Schaulsohn, refutó que los documentos que presentó hayan significado infiltración al Ejército, declinando contestar sobre su origen el cual señaló estaría dispuesto a aclarar ante los tribunales. Afirmó que si él llega a revelar quién le entregó los documentos del Ejército referidos al caso de los cheques, "el senador Sinclair va a ser el primer sorprendido y no va a saber qué hacer con sus propias palabras".

El Ministro Secretario General de Gobierno, Enrique Correa, informó que la situación de tensión producida con el Ejército "se normalizará completamente en el día de hoy". Confirmó, además que durante el fin de semana el comandante en jefe del Ejército se reunió con el Vicepresidente de la República, Enrique Krauss. Afirmó que las inquietudes planteadas al Gobierno "ya están resueltas y las situaciones que pudieran haber llevado a confusión aclaradas. El Ministro Correa sostuvo que entre los asuntos (que preocupaban al Ejército) hay algunos que dicen relación con el Ministerio de Educación y el modo en que debe ser tratada en la Ley Orgánica la educación militar. "Otros diálogos", agregó, se refieren a decretos pendientes, los que están siendo apurados, y a la estabilidad de propiedades fiscales y de propiedades que son del Ejército."

En cuanto a los procesos pendientes en los tribunales, afirmó que dichos órganos judiciales "deben atenerse a la ley, y no corresponde a nosotros intervenir".

Por último, descartó que el Gobierno vaya a presentar un nuevo proyecto de ley relativo a materias orgánicas de las Fuerzas Armadas e indicó que a su juicio "no es posible que la ley orgánica -cuya reforma ya envió al Parlamento- pueda ser discutida pronto".

El candidato presidencial de la UDI, Jovino Novoa, señaló que una ley de "punto final" "si existe un espíritu constructivo, debería ser la culminación de un proceso donde realmente se ponga término a todas las situaciones de conflicto del pasado".

El candidato presidencial de RN, Manuel Feliú, sostuvo que los últimos sucesos demuestran que "todavía no está concluido el proceso de tránsito a la democracia". Añadió que los hechos acaecidos constituyen "una situación que de alguna manera se venía gestionando desde hace bastante tiempo. Había situaciones complejas que no se manejaron bien". Agregó que hay canales institucionales de salida para el conflicto, los que requieren del esfuerzo tanto del Gobierno como de las Fuerzas Armadas.

El Comandante en Jefe de la FACH, general Ramón Vega, dijo que la los chilenos deben trabajar por el "perfeccionamiento de las instituciones democráticas". Agregó que la FACH se encuentra trabajando normalmente y llamó "a estar tranquilos ante situaciones coyunturales, muchas veces válidas, para que sean resueltas por los canales jerárquicos que corresponden".

El presidente de RN, Andrés Allamand, manifestó que había que avanzar rápido en una interpretación clara y categórica de la ley de amnistía de 1978. Señaló que el Gobierno ha impulsado la idea de que los procesos de la ley de amnistía deben ser investigados y con posterioridad aplicarse los efectos de la ley. A su juicio, este es un grave error porque lo que hace la ley de amnistía es borrar el delito. Por eso esta interpretación judicial seguida por el Gobierno es una fuente de perturbaciones y conflictos innecesarios.

La Epoca informa que los tribunales han reabierto treinta procesos por violaciones a los DD.HH. durante 1993, que se incluyen en un total de doscientas causas que instruye el Poder Judicial desde que la Comisión Verdad y Reconciliación emitió su informe (marzo, 1991) La Epoca agrega que efectivamente en numerosos casos, al menos veinte, militares han sido citados a declarar; pero subraya que se trata de los mismos que ya han prestado declaración en casos como el secuestro de Alfonso Chanfreau.

Por otra parte, La Nación señala que según diputados de oposición, militares han filtrado su preocupación por la presunta filiación socialista del titular del 5º Juzgado del Crimen, Alejandro Solís, quien aparte de ser un magistrado severo habría sufrido algunas consecuencias inmediatas del golpe de 1973.

La Nación informa que el Consejo de Defensa del Estado concluyó que los terrenos de Villa Grimaldi fueron vendidos a familiares del ex director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel en menos de la mitad de su valor. Por ello solicitó que se amplíe el auto de procesamiento contra el militar y otras cinco personas por el delito de fraude al fisco.

En otra nota La Nación indica que el abogado Nelson Caucoto, querellante en el proceso por la detención y desaparición de los hermanos Juan Carlos y Jorge Elías Andrónico Antequera, anunció que solicitará la ampliación del auto de procesamiento contra el coronel Fernando Laureani, por el secuestro de Luis Francisco González Manríquez, ocurrido el mismo día de los hermanos Andrónico.

Encuesta de opinión pública

Un sondeo telefónico realizado el lunes 31 por Asimerc a 226 personas en Santiago, señala que el 92% de los entrevistados estaba enterado de los hechos.

Un 64.4% señaló que no era una buena manera de actuar la reacción del Ejército y el 27.8% estima que es "una buena manera" de actuar.

Un 35.5% de los entrevistados consideró la reunión del viernes como algo normal. En tanto, para el 54.8% estima que tuvo "otras motivaciones" y el 9.6% no contestó.

Luego el 64.4 estimó que los sucesos no son una buena manera de expresar una posición por parte del Ejército. El 27.8% piensa que sí y el 7.6% no respondió.

Además el 48% afirma que fueron por un problema puntual y el 47.6% que obedecieron a un problema de fondo. El 4.3% no contestó.

El 50% se declara "insatisfecho" con la reacción del Gobierno frente a los sucesos. El 38.4% se considera "satisfecho" y el 11.5% no opinó.

En tanto, el 64.4% piensa que en este tipo de situaciones "es mejor informar inmediatamente" y el 31.2 sostiene que es mejor hacerlo "posteriormente, una vez solucionado todo el problema"

Por último, un 43.2% de los entrevistados piensa que las relaciones con las FF. AA. en un eventual Gobierno de Eduardo Frei, serán iguales, el 39.9% cree que serán mejores. El 10.5% afirma que serán peores.

De los entrevistados, el 58.8% se define como partidario del Gobierno. El 24.5% se declara opositor y el 16.6% no responde.

TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS:

La Tercera, en su editorial, estima que de lo ocurrido el viernes sólo ha quedado como señales, pero que han causado preocupación en lo que respecta a la consolidación y expansión del sistema democrático. A pesar de los comunicados, la opinión pública tiene claro que hay una fuerte tensión y que se llevan a cabo reuniones para poner término a ella. Se está -dice La Tercera- frente a una especie de comedia del absurdo, ya que los hechos se encargan de desmentir las versiones oficiales. Pareciera recomendable que en el diálogo iniciado se aborden no sólo los problemas coyunturales que motivaron la acción del Ejército; es preciso que en esta instancia se cree, además, un mecanismo que permita resolver cualesquiera problemas futuros que puedan afectar la normal relación cívico-militar, pues a juzgar por lo acontecido, los canales existentes "- como el Consejo de Seguridad Nacional-" han demostrado su escasa viabilidad para enfrentar situaciones críticas.

Víctor Maldonado, columnista de La Nación, señala que si una demostración de fuerza se realiza cuando no se debe o resulta incomprensible, termina siendo una demostración de debilidad. Dadas las condiciones actuales sólo queda una salida a la crisis temporal de relaciones: el respaldo explícito e irrestricto a las normas definidas en la Constitución y las leyes.

El Diario plantea que se han logrado "avances" en los contactos entre Gobierno y Ejército, "pese a que en La Moneda se niega la negociación".